

OFICIO Nro. /00

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de diciembre de 2000

**A la Señora Presidente de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lic. María Cecilia Felgueras**

S / D

En mi carácter de Asesor General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de comunicar a la Legislatura el presente informe que corresponde al año 2000 y contiene los criterios generales de actuación de los Magistrados, Funcionarios y demás integrantes del Ministerio Público en lo atinente al área de la Asesoría General a mi cargo, en los términos del art. 17, inc. 6°, de la Ley 21 de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo la Asesoría Tutelar ante el fuero Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboró el informe anual correspondiente a la actividad desarrollada en el período del año que va desde el inicio de su funcionamiento con fecha 02/10/00 hasta la fecha 24/11/00.

El informe individualizado se acompaña en sus piezas pertinentes. (Ver Anexo I)

INDICE

I- Autonomía Funcional y Autarquía del Ministerio Público

- I.1- Introducción
- I.2- Notas distintivas que surgen de la Constitución y de la ley
- I.3- Autonomía y Autarquía: Su conceptualización
- I.4- La importancia del Ministerio Público como órgano extrapoder
- I.5- Presentaciones en sede Judicial
- I.6- Conclusiones

II- Actuación Extrajudicial de la Asesoría General de Incapaces en los términos de la ley N° 21 y en concordancia con los postulados de la ley N° 114 y N° 448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- II.1- Introducción. Fundamentos Normativos
- II.2- Niños, Niñas y Adolescentes y la ley N° 114 de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires
- II.3- "Inhabilitados e Incapaces" y la ley N° 448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

III- Actividades de Extensión Interinstitucional de la Asesoría General de Incapaces

- III.1- Vinculación con Embajadas
- III.2- Red Investigativa Internacional de la Niñez
- III.3- Invitación a participar de reuniones mensuales con representantes de los Servicios Sociales de los Hospitales Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- III.4- Acta- Acuerdo entre la Dirección de la Mujer, Dirección General de Educación y la Asesoría General de Incapaces
- III.5- Acta-Acuerdo entre Dirección General de Educación y la Asesoría General de Incapaces
- III.6- Acta- Acuerdo entre Universidad de Morón y la Asesoría General de Incapaces
- III.7- Seminario de Capacitación
- III.8- Congreso "Ministerio Público 2000"
- III.9- Disertación de la Asesora General Adjunta en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- III.10- Invitación de la Universidad de Tel Aviv a integrar mesa redonda

IV- Actividades Intrainstitucionales de la Asesoría General de Incapaces

- IV.1- Propuesta de modificación del Reglamento Interno del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- IV.2- Anteproyectos: Tribunales de Vecindad y Policía Judicial
- IV.3- Curso de Capacitación Interna

V- Actuación Judicial de la Asesoría General de Incapaces

VI- Organización y Estructura Definitiva de la Asesoría General de Incapaces

- VI.1- Designación de Asesora General Adjunta
- VI.2- Designación Asesor Tutelar ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- VI.3- Estructura Definitiva

ANEXO I: Informe Anual de la Asesoría Tutelar en lo Contencioso- Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO II: Resoluciones de la Asesoría General de Incapaces

- **N° 14/00** Cooperación Técnica a Red de Defensorías del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- **N° 37/00** Extensión de habilitación del Centro Contrvencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a niños y adolescentes no contraventores
- **N° 57/00** Derogación de Acordadas N° 837/87 y N° 869/91 de I a Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
- **N° 67/00** Creación de Comisión de estudio para elaboración de anteproyectos de ley
- **N° 69/00** Creación de Comisión interinstitucional para la implementación de un Programa de Prevención a la Victimización de Lactantes
- **N° 97/00** Elaboración conjunta de Guía Básica de Recursos Sociales
- **N° 98/00** Elaboración de convenio de colaboración con la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para implementación de Programa de Prevención de Maltrato y Abuso Sexual Infantil
- **N° 117/00** Designación del representante de la Asesoría General de Incapaces ante el Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO III: Operatividad de la Resolución de la Asesoría General de Incapaces N° 57/00

- **Oficio N° 347/00** Contestación a oficio dirigido al Señor Director de la Dirección General de Atención a la Salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- **Oficio N° 365/00** Contestación a oficio dirigido al Señor Secretario de la Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO IV: Guía Básica de Recursos Sociales

ANEXO V: Cuadro comparativo entre la ley nacional N° 22.914 y la ley N° 448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO VI: Resolución de la Asesoría General de Incapaces N° 3 1/00

ANEXO VII: Fundamentos y Anteproyecto sobre Tribunales de Vecindad

ANEXO VIII: Cuadro comparativo sobre Policía Judicial

ANEXO IX: Resoluciones de la Asesoría General de Incapaces por actuación judicial

- **N° 08/00** Solicitud de medidas en relación a los niños rumanos mendigando en la calle
- **N° 09/00** Actuación en los autos caratulados "Pizzio, Norberto; Leguizamón Jaqueline y otros s/ presentación".
- **N° 28/00** Actuación en autos caratulados: "B.J.E (Asociación de Trabajadores Estudiantes Brazo Libertario) s/ presentación"
- **N° 50/00** Actuación a pedido de la Asesora Civil e Incapaces N° 2 de Trelew, Provincias de Chubut por la desaparición de la joven E.M
- **N° 52/00** Solicitud de no aplicación de Decreto 430/00 del P.E.N por un grupo de hermanos menores de edad.

ANEXO X: Resolución del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°320/00

I- AUTONOMIA FUNCIONAL Y AUTARQUIA DEL MINISTERIO PUBLICO

I. 1- Introducción

En la presentación del año 1999,- el primero desde que se constituyó esta Asesoría General-, se hizo conocer a ese Honorable Cuerpo con el carácter de introducción un informe circunstanciado en relación a la caracterización constitucional de este órgano a mi cargo, sus antecedentes históricos desde la óptica del derecho comparado y del derecho público local, previo al desarrollo concreto de la actividad desplegada desde su inicio, por entender que resultaba entonces imprescindible explicar el marco constitucional-histórico-legal que regularía en el futuro la actividad de este órgano del Ministerio Público.

Se explicaba también en aquella oportunidad que las notas distintivas que surgen de la Constitución y la ley respecto al Ministerio Público son su autonomía funcional y autarquía.

En este segundo informe me parece muy oportuno reiterar aquellos conceptos por dos razones fundamentales:

a) Cuestión pendiente de resolución:

Hasta la fecha no ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cuestión de índole constitucional que tiene como partes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una dilucidación por el reparto de competencias propias que, a nuestro juicio, este último no quiere reconocer generando una situación que avasalla clara y concretamente tales notas antes mencionadas y;

b) Declaración de San Luis

En el interín, entre el informe del año 1999 y el de este año, sobrevino un hecho trascendente como lo es la Declaración de San Luis en mayo del año 2000, que fue el resultado del Congreso que nucleó a todos los representantes de los Ministerios Públicos del país y en la cual, en conjunto, se expresan abiertamente en favor de autonomía mas amplia para el Ministerio Público cualquiera sea su ubicación institucional en la estructura del poder, es decir ya sea que se encuentre como órgano extra-poder o bien dentro del Poder Judicial.

La Declaración en cuestión en forma textual expresa: ***“En Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil, los integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores Generales de la República Argentina, resuelven por unanimidad, declarar: Que resulta indispensable para fortalecer la autonomía del Ministerio Público, hacer saber a las autoridades gubernamentales de los Estados Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe propenderse al dictado de normas constitucionales o infraconstitucionales que garanticen al Ministerio Público una total independencia orgánica, dotándolo de propiedades de plena autonomía funcional y autarquía financiera, con prescindencia de su integración dentro o fuera del Poder Judicial. Que además de ello, la eficaz instrumentación del sistema acusatorio presupone la necesidad de contar con una Policía Judicial a la orden del Ministerio Público destinada a la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos. Que en aquellos casos en los que el Ministerio Público se encuentre formando parte del Poder Judicial, el mismo constituye una magistratura requirente (en la acusación, en la defensa, y en la representación de los menores e incapaces) que debe tener idéntica jerarquía funcional y presupuestaria que la magistratura judicial, como así también***

que la superintendencia a su respecto debe ser ejercida en forma exclusiva y excluyente por la jefatura del Ministerio Público”

Tal declaración impulsa a esta Asesoría, cada día con más fuerza y convicción, a defender lo que le pertenece ya que sin autonomía funcional ni autarquía plenas, el Ministerio Público queda vacío de contenido y con sus facultades sensiblemente acotadas.

Es evidente que este no ha sido el espíritu del constituyente del año 1996 quién, pese a colocar este órgano dentro de Poder Judicial, expresa su más clara voluntad de mantener las notas de independencia que rodean al Ministerio Público de la Nación.

Por estas dos razones parece oportuno insistir en lo manifestado en el informe anterior oportunamente elevado a esta Legislatura, el cual en forma resumida expresa:

I. 2 Notas distintivas que surgen de la Constitución y la ley

I.2.1- La Constitución

Conforme dice Lino Palacio en su “Manual de Derecho Procesal Civil” (Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992, pag. 183), *“se define al Ministerio Público como el conjunto de funcionarios a quienes se ha confiado como misión esencial la defensa de los intereses vinculados al orden público y social. Sus miembros integran una magistratura especial, distinta y autónoma con respecto a la de jueces y tribunales con quienes colaboran en la función de administrar justicia”*.

La doctrina está conteste en que para cumplir con los objetivos indicados precedentemente, el Ministerio Público no debe estar expuesto a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su creación.

Ello no podría ser de otra manera y en tal sentido se han expresado autores no solamente nacionales sino extranjeros. Vale la pena remarcar la opinión vertida por José María Rico en la obra “Justicia Penal y transición democrática en América Latina” (Ed. Siglo XXI, México, 1997, pag. 113), cuando expresa que *“la independencia del Ministerio Público está reconocida en todas las Constituciones, en los Códigos Procedimentales o en las leyes orgánicas de la totalidad de los países latinoamericanos”*.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhiere incondicionalmente a los principios expuestos en materia de Ministerio Público, establece con toda claridad en los artículos 124 y 125 la autonomía funcional y la autarquía de dicho órgano.

I.2.2- La ley

La Ley orgánica del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley n°21, se expresa en el mismo sentido .

Tal autonomía y autarquía, reconocidas constitucionalmente, representan las garantías para el debido ejercicio de las funciones que el propio texto le atribuye, como asimismo para dotarlo de eficiencia y hacer efectivas sus responsabilidades. El pleno ejercicio de las mismas no podría lograrse sin las características expuestas.

I.3- Autonomía y Autarquía: Su conceptualización

"La autonomía es un concepto jurídico que supone un poder de derecho público no soberano que –en virtud de un derecho propio y no sólo de una delegación- establece reglas de derecho obligatorias. En sentido jurídico, la autonomía aparece siempre un poder legislativo".¹

Por *autarquía* se ha entendido la capacidad de autoadministrarse o autogobernarse, pero conforme a estatutos orgánicos provenientes de un poder superior.²

En este sentido, el vocablo ha sido tomado de la palabra griega "*autarchia*", proveniente del verbo "*archein*" que significa ser príncipe o jefe, y no de su semejante en el mismo idioma "*autarkeia*" que revela la capacidad de bastarse a sí mismo y que proviene del verbo "*arkein*" que revela la capacidad de autosuficiencia financiera llamada "*autarcia*" o "*autarcía*".

En la composición de ambos términos tenemos un elemento común que es "*auto*", del griego "*autós*" que quiere decir uno mismo, siendo pues que la "*archía*" o la "*nomía*" son ejercidas por la misma persona que aparece así como sujeto pasivo de una u otra acción, siendo el sujeto pasivo también el sujeto activo.

Mientras que autonomía y autarquía son conceptos jurídicos, siendo que autonomía es también un concepto político en tanto implica el poder de propia legislación; autarquía y autarcía traducen conceptos administrativos.

Asimismo, sostiene Mario Justo López que la autonomía supone un grado de competencia menor o inferior al que corresponde a la soberanía y está caracterizado por la facultad de darse la propia ley, si bien con sujeción a ciertas restricciones, siendo este concepto el que predomina cada vez más.

En cambio, la autarquía supone un grado de competencia inferior que el correspondiente a la autonomía, y significa atribución o facultad de administrarse a sí mismo pero de acuerdo con normas que le fueron impuestas. A lo sumo, sostiene López, la autarquía puede implicar la potestad reglamentaria pero sin llegar nunca a la potestad legislativa propiamente dicha.

Debe recordarse que "*autarquía significa que un ente tiene capacidad para administrarse a sí mismo, y autonomía, además de la característica anterior, que el órgano tiene competencia para dictarse sus propias normas dentro del marco normativo general dado por un ente superior*" (Gordillo, Agustín. "Tratado de Derecho Administrativo", Tº I, Capítulo XI, Edit. Macchi, Buenos Aires, 1994, pag.6).

En el mismo sentido sobre autonomía, se ha expresado M.M. Diez ("Manual de Derecho Administrativo", Tº I, pag. 146, Ed it. Plus Ultra, 1983), cuando remitiendo a Bielsa y Gordillo, manifiesta que la autonomía y la autarquía tienen entre sí una relación de grado, pues mientras la autonomía implica que la entidad puede dictarse sus propias normas y regirse por ellas, la autarquía "recibe

¹ Laband, Paul. Le Droit Public de l' Empire Allemand, Tº I, pag. 178, Paris, 1900, citado por Horacio Creo Bay, en "Los Conceptos de autonomía y autarquía", El Derecho Administrativo, hoy: Jornadas presididas por el profesor Dr. Miguel S. Marienhoff. Edit. Ciencias de la Administración (auspiciante).

² Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Tº I, 3º Edición, Buenos Aires, 1995, pag. 14-19 y autores allí citados, en "Los conceptos de autonomía y autarquía por Horacio Creo Bay, El Derecho Administrativo, hoy: Jornadas presididas por el profesor Dr. Miguel S. Marienhoff. Edit. Ciencias de la Administración (auspiciante).

la ley de afuera” pero es capaz de darse su propio estatuto que quedará sujeto a lo que la norma que la creó disponga sobre su aprobación por el ente central; es decir, que en mayor o menor medida ambos tipos de entidades tienen facultades normativas y el *Ministerio Público tiene aspectos de ambas*.

Conviene recordar que el diccionario “Plaza y Janes” define a la autarquía como *“la calidad del ser que no necesita de otro para su propia subsistencia”*, al tiempo que el diccionario de la Enciclopedia Sopena la define como *“Bienestar, satisfacción del propio estado”*.

Es decir que la autonomía es un concepto más ligado al Derecho Político en tanto que la autarquía tiene más bien relación con el Derecho Administrativo.

Lo que no cabe ninguna duda es que el constituyente le ha otorgado al Ministerio Público las dos características de manera tal que para cumplir con sus funciones puede y debe dictarse sus normas –reglamento e instrucciones generales de actuación- (autonomía funcional), y autoadministrarse, lo que incluye facultades de orden financiero (autarquía).

Vale acotar que de acuerdo a todo lo expuesto, el concepto de autarquía es más amplio que el de autarquía financiera simplemente que figura asentado en el art. 1° de la Ley n°21.

La autonomía funcional implica “independizar” al Ministerio Público de la injerencia de cualquier otro poder, sistema de poder y órgano del Estado. Consecuentemente las políticas y los reglamentos para el funcionamiento de dicho Ministerio deben ser adoptadas por el propio órgano en sus respectivas áreas.

De esta manera se reivindica la plena competencia del Ministerio Público para dictar reglamentos y establecer sanciones administrativas disciplinarias de sus miembros.

I.4- La importancia del Ministerio Público como órgano extrapoder

El objetivo de ubicar al Ministerio Público como órgano extrapoder o dentro del Poder Judicial no es solamente para que no reciba instrucciones del Poder Ejecutivo, sino también para que no reciba instrucciones de ningún otro órgano de poder aunque éste se encuentre en el propio ámbito del Poder Judicial. De lo contrario, la autonomía y autarquía quedarán convertidas en una verdadera ficción.

La autarquía implica de manera concreta que la ley de presupuesto debe asignarle al Ministerio Público los recursos en forma separada y el propio Ministerio debe tener a su entera disposición la administración de los mismos. Dicho concepto implica que ningún órgano puede inmiscuirse en el uso de los recursos, aunque esté incluido en el propio Poder Judicial.

Es muy útil recordar con Quiroga Lavié que la inclusión del Ministerio Público *“no debe atenderse que se le hace para limitar su autonomía o su autarquía sino solamente para fijar el ámbito de actuación donde las debe ejercer”* (Quiroga Lavié H. Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Rubinzal- Culzoni, Bs.As. 1996, p. 354).

Así se expresa quien fuera constituyente en la Convención Nacional de 1994 que decidió la incorporación del Ministerio Público como órgano extrapoder y sin embargo, aunque la solución del constituyente local es diferente, coincide en que ello no altera en manera alguna el funcionamiento del órgano con sus notas distintivas: autonomía y autarquía.

Por otra parte, si las facultades de dictar reglamentos, nombrar y remover

funcionarios y ejecutar y administrar su presupuesto se le concede al Tribunal Superior (art. 114 constitucional y 2 inc. 3, 5, 6 y 7 de la ley n° 31), tanto más debe reconocérsele al Ministerio Público que constitucionalmente es el órgano exclusivo establecido como autónomo, autárquico e independiente.

Asimismo, cabe consignar que existe en el Ministerio una clara dependencia jerárquica que tiene como fundamento permitir que cada integrante controle el correcto desempeño de los que ostentan un menor nivel jerárquico y de quienes los asisten. (Arts. 124 de la C.C.B.A y art. 16 de la ley n° 21)

Se observa que el juego de las normas constitucionales apunta a dotar al Ministerio Público de las anticipadas características porque interpretar lo contrario sería impedir su funcionamiento y nadie puede pensar que el constituyente le otorgó autonomía y autarquía como simples expresiones vacías de contenido sino por el contrario, hay en su texto indicaciones muy concretas dirigidas a los poderes constituidos que estos no pueden violentar so pena de producir una abierta violación constitucional.

El Dr. Bidart Campos expresa que *“sabido es que la Constitución como norma jurídica no consiste en un mero consejo o recomendación hacia los poderes constituidos, habida cuenta que tiene fuerza normativa en toda su integridad y como norma jurídica que es el fundamento del orden jurídico de un Estado, es el vértice obligatorio e imperativo de todo ordenamiento jurídico y político y vincula a todos los órganos”* (Bidart Campos, Germán, El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa EDIAR, Bs. As. 1995, pag. 87) ya que la independencia de ciertos órganos autónomos y autárquicos debe ser tanto externa como interna.

En oportunidad de tratarse en el seno de esa Legislatura el tema del Ministerio Público, el diputado Eduardo Jozami sostuvo que: *“En la doctrina constitucional, algunos como Bielsa y Joaquín V. González habían sostenido la dependencia del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo. Otros entendían que debía considerárselo esencialmente vinculado al Poder Judicial. Lo cierto es que no teníamos disposiciones constitucionales que reglaran la materia hasta 1994, con la reforma constitucional de Santa Fe. Pero, si bien la reforma de Santa Fe de alguna manera cubrió este vacío histórico, tampoco definió con absoluta claridad esta cuestión... Por el contrario, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que el Ministerio Público es un organismo dependiente del Poder Judicial, es decir, integrado al Poder Judicial; y de este modo, no sólo el Ministerio Público tiene autonomía funcional, como también señala el art. 120 de la Constitución Nacional, no sólo goza de autarquía financiera como también señala el texto constitucional, sino que aquí se ha garantizado efectivamente su independencia del poder administrador”*. (VT 18- del 16 de abril de 1998, en Versión Taquigráfica de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomo V III/98, pág. 105).

I.5- Presentaciones en sede Judicial

I.5.1- Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En este mismo sentido se ha expresado este Ministerio Público Tutelar en oportunidad de su presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La defensa de dicho principio constitucional fue articulada con ajustada ética en el reclamo incoado en autos “Ministerio Público (Defensoría y Asesoría General de Menores e Incapaces) c/Consejo de la Magistratura s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. 70/99, que tramitara ante el Tribunal Su-

perior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aún cuando dicho Tribunal resolvió no hacer lugar a la pretensión incoada desde el Ministerio Público (conf. fallo del 22/10/99), ubicando institucionalmente al Ministerio Público local en arbitraria subordinación al Consejo de la Magistratura local, y restándole las actividades de índole administrativa.

I.5.2- Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sus fundamentos

Ante tal decisorio desfavorable el Ministerio Público articuló el remedio federal correspondiente. En fecha 05/77/99 se interpuso formal Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Del análisis detenido de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se evidencia la imperiosa necesidad de modificar la Ley n°31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este instrumento normativo crea y regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura local, a efectos de garantizar un Ministerio Público independiente de los otros poderes del Estado dotándolo de autonomía y autarquía verdaderas.

Adviértase que los miembros del Tribunal Superior de Justicia han tenido que efectuar infructuosos esfuerzos interpretativos para compatibilizar el principio emanado del art. 107 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ubica al Ministerio Público dentro del Poder Judicial local, y el art. 124 de la misma Constitución, que otorga autonomía y autarquía al Ministerio Público local.

Sin embargo, de la sentencia recurrida surge que la interpretación que pretende sustentar la misma resulta inequitativa, inadecuada y sólo con fundamentación aparente, lo que descalifica el fallo y motiva el recurso antedicho.

Así, el simple lector del fallo encontrará en el voto de los señores Ministros del Alto Tribunal, únicamente el sostenimiento de un valladar formal para poder desestimar, sin sustanciar, el planteo de inconstitucionalidad efectuado por el señor Fiscal General Adjunto, a efectos de no ingresar en la cuestión de fondo.

De ninguno de los votos surge claramente, como puede el Ministerio Público ejercer su autonomía y autarquía dentro la ubicación institucional que lo incorpora al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: sin reglamento propio, sin posibilidad de efectuar contrataciones, con una reducida planta de personal, y sin recursos económicos propios, salvo la mínima prestación que en concepto de “gastos de funcionamiento” otorga el Consejo de la Magistratura.

Es indudable que tal situación se ve agravada si se tiene en cuenta el futuro traspaso de Fiscalías, Defensorías de Pobres y Ausentes, y Defensoría Públicas de Menores e Incapaces, que actualmente dependen un Ministerio Público Nacional verdaderamente autárquico y autónomo, y respecto del cual deberá evaluarse el traspaso de empleados, funcionarios, magistrados (resguardando derechos adquiridos), y el traspaso de edificios y partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de una verdadera estructura de Ministerio Público.

I.6- Conclusiones

Este Ministerio Público, que hoy se encuentra en su etapa fundacional, cumplirá en el futuro la esencial labor que la Constitución y la ley tienen reser-

vada para él.

Pero para tal fin es indispensable que se advierta sobre los peligros de avanzar sobre su autonomía porque en tal caso habremos convertido una institución al servicio de satisfacer el interés social y defender la legalidad en un mero apéndice del Poder Judicial; en una suerte de auxiliar de la justicia que no podrá cumplir con los claros principios y definidos roles que esa Legislatura le asignó cuando sancionó la ley n° 21.

Es indispensable que el poder limite al poder; es insoslayable que los frenos y contrapesos, los famosos “checks and balances” funcionen equilibradamente para conseguir un Ministerio Público fuerte, autónomo, autárquico, con independencia de criterio y en condiciones de cumplir con los objetivos de la ley.

Es de gran utilidad recordar el trabajo de Claus Roxin denominado “Posición jurídica, tareas futuras del Ministerio Público” glosado en “El Ministerio Público en el Proceso Penal” (pág. 48, año 1993, editorial Ad-Hoc): ***“Él (fiscal) no es, de modo alguno, agente executor de la jurisdicción, sino su par, en igualdad de condiciones, en la administración de justicia, y en esta posición ... es llamada a efectuar un juicio jurídico independiente. La función de custodio de las leyes rige, por lo tanto, también frente a los tribunales, así como a la inversa, naturalmente, los tribunales examinan, de acuerdo a los parámetros de su propio entendimiento, la concepción jurídica del ministerio público cuando a ellos les toca ocuparse del asunto. ...”***

Asimismo, en párrafos posteriores continúa expresando: ***“... Sin embargo, en nuestro contexto es decisiva la comprensión de que la función del ministerio de garantizar la libertad, inherente a un Estado de Derecho, alcanza ciertamente su más pura expresión cuando se adopta el punto de vista aquí sostenido, de que por regla puede ser impuesta una pena, únicamente, cuando dos autoridades de la justicia, independientes una de la otra, ministerio público y tribunal, juzgan coincidentemente a un comportamiento como punible. La separación de la actividad de perseguir y la decidir tiene, entonces, no solo el fin psicológico-procesal, ... de asegurar al juez una objetividad elevada sino que protege también al imputado de la posible valoración jurídica parcial de una sola autoridad judicial”***

Tal como surge de todo lo expresado en los párrafos precedentes, la cuestión sobre la autonomía y autarquía del Ministerio Público local sigue latente. Es una cuestión pendiente.

A pesar de la situación planteada, esta Asesoría General de Incapaces procuró que la misma no fuera óbice para cumplir con las funciones encomendadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley n° 21.

Seguidamente, se consigna una síntesis de la actividad desplegada por este organismo en el transcurso del año 2000.

II- ACTUACION EXTRAJUDICIAL DE LA ASESORIA GENERAL DE INCAPACES EN LOS TERMINOS DE LA LEY 21 Y EN CONCORDANCIA CON LOS POSTULADOS DE LA LEY 114 y LA LEY 448.

II. 1- Introducción. Fundamentos normativos:

La actividad extrajudicial de esta Asesoría General de Incapaces es una de las funciones primordiales que debe desarrollar a fin de dar cumplimiento con los dispositivos legales que delimitan y estructuran su ámbito de acción.

Tal como surge del análisis pormenorizado de la normativa vigente, la actividad extrajudicial del Ministerio Público en general y, de esta Asesoría en especial, se encuentra ampliamente receptada.

Veamos, el art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: *"Son funciones del Ministerio Público... Velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social..."*.

En la actualidad no cabe duda alguna sobre la importancia en desempeñar un rol que revele una participación activa en el diseño, implementación, articulación y ejecución de programas y/o proyectos de índole social que tiendan al desarrollo de las redes sociales comunitarias.

Es decir, consideramos que es de suma utilidad que esta Asesoría General apoye y acompañe todo proceso que tienda al refuerzo de las instancias administrativas que median entre los ciudadanos y el poder judicial al repercutir, en forma directa, en el mejoramiento de la prestación del servicio de justicia.

En definitiva, esta afirmación no hace más que focalizar en la "prevención" como requisito "sine qua non" a fin de brindar una real protección a la comunidad, en especial a los sectores sociales que más nos preocupan por su mayor grado de vulnerabilidad como son los niños, adolescentes, inhabilitados e incapaces.

Esta directiva de carácter constitucional local es el fundamento que sustenta y sobre la cual se estructura la ley Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, n°21 que, en varios de sus articulados expresa en forma directa, "el deber" que recae sobre dicho organismo: *"...por misión primordial promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de acuerdo con los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar... la satisfacción del interés social"* (art. 1).

Asimismo, el art. 34 enumera (no es taxativo) un cúmulo de funciones a cargo de los Asesores de Incapaces, que denotan las amplias facultades otorgadas a este organismo en todos los temas vinculados a niños, adolescentes, inhabilitados e incapaces.

A modo de ejemplo, el inc. 4 consigna: *"Intervenir, en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte los derechos de las personas menores de edad o de los incapaces, y entablar en defensa de éstos/as las acciones y recursos pertinentes..."*.

Aun sin entrar a analizar en profundidad la norma mencionada, se advierte que el art. 59 del Código Civil, que desde 1869 (año de entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo) dispone expresamente sobre la actividad del Ministerio Público "más allá " del ámbito judicial.

En consecuencia, esta Asesoría General de Incapaces procura continuar con directivas vigentes y consolidadas.

Esta Asesoría General de Incapaces ha enfatizado en actividades que hacen al ámbito extrajudicial a través del despliegue de acciones positivas tendientes a procurar la satisfacción del interés social.

Durante el transcurso del año, las diversas y disímiles actividades extrajudiciales desarrolladas se sustentan a la luz de dos normativas vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de trascendencia para la materia que nos compete como lo son la ley n° 114 sobre Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la ley n° 448 sobre Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II. 2- Niños, Niñas y Adolescentes y la ley n° 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

II.2.1- Algunos aspectos de la ley N° 114

En primer lugar cabe citar la ley n° 114 por ser el fundamento normativo básico o primordial de la mayoría de las acciones desarrolladas por esta Asesoría General de Incapaces, sin dejar de tenerse en cuenta el escaso lapso transcurrido desde su entrada en vigencia (3 de diciembre de 1998).

El objeto de esta ley reside en la protección integral de los derechos niñas, niños y adolescentes para el goce y ejercicio de los derechos fundamentales inherentes a su condición de personas. Por imperio de la misma se garantiza la igualdad de oportunidades y participación social de los niñas, niños y adolescentes en procura del pleno desarrollo físico, psíquico, moral y espiritual; en condiciones de libertad, igualdad y dignidad.

II.2.2- Efectivización de derechos: Resoluciones de la Asesoría General de Incapaces

La operatividad de la ley n° 114 se evidencia en el dictado de varias resoluciones por parte de esta Asesoría General de Incapaces a fin de colaborar activamente con el espíritu de dicha normativa. Entre éstas, ordenadas cronológicamente y cuyas copias se adjuntan, se destacan: (Ver Anexo II)

- **Resolución 14/00 de fecha 18 de febrero de 2000**

a) Fundamento fáctico

De lo dispuesto por los arts. 60 a 70 de la ley 114, surge palmariamente el rol preponderante que se le otorga a las actuales Defensorías Zonales dependientes del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires (en funciones desde el mes de noviembre del 2000) atento la cantidad y calidad de las facultades estipuladas y sólo a modo enunciativo.

Antes de la puesta en funcionamiento del Consejo mencionado y del resto de lo órganos que de él dependen (conf. arts. 47 a 49 de la ley n° 114), éstas Defensorías Zonales conformaban las denominadas Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes dependientes de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Fundamento jurídico

El objetivo primario de éstos organismos descentralizados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires radica en diseñar y desarrollar un sistema articulado para la efectivización, resguardo y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta Asesoría General de Incapaces comparte plenamente sus objetivos descriptos como así también visualiza sobre la necesidad de su intervención no sólo en el ámbito extrajudicial, de carácter primordial, sino además, para los supuestos que así lo requieran, que se asuma la defensa técnica de los niños y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires involucrados y de su grupo familiar afirmando en todo momento al "interés superior del niño" como eje rector de su accionar.

En consecuencia, se procedió a la coordinación de tareas varias a fin de prestar colaboración técnica a la esta Red de Defensorías por parte de esta Asesoría General de Incapaces.

c) Contenido del Contrato de Cooperación Técnica

En el marco de dicha resolución suscribió un convenio de colaboración cuya duración estipulada es de un año a partir de la firma del mismo producida en 11/12/00 con renovación automática por igual período, cuyo objeto reside en:

- *Programa de Colaboración:* Se implementa un programa de colaboración con la finalidad de articular acciones conjuntas en el marco del paradigma de la protección integral de derechos.
- *Capacitación:* Esta es entendida como la formación crítica, reflexiva y permanente a fin de generar criterios comunes de intervención por parte de los profesionales, técnicos, docentes y funcionarios que trabajan en la detección y resolución de problemáticas que atañen a la infancia y adolescencia. Así también en relación al diseño de programas y planes para el efectivo cumplimiento de los derechos plasmados en la ley n° 11 4.
- *Investigación:* Las tareas de investigación se sujetarán a los insumos proporcionados por cada área en cuestión (programas). Asimismo, se prevee tareas de sistematización y medición de la demanda con el objetivo de constituir un registro único de demandas por parte de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- *Difusión y Promoción:* Esto es con relación a las acciones jurídicas y sociales que atañen a las áreas de interés de niñas, niños y adolescentes.

d) Particularidades

Es dable aclarar que el tiempo transcurrido entre la presente resolución y la firma del convenio obedece a que, cuando se encontraba en la última etapa del procedimiento administrativo correspondiente y la firma del mismo era inminente, se produce la puesta en funcionamiento del Consejo de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes dependiente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la cual depende la Red de Defensorías en cuestión, por lo que se debió comenzar a gestionar la firma del convenio en dicho ámbito administrativo.

• Resolución 37/00 de fecha 28 de abril de 2000

a) Fundamento fáctico

En la Ciudad de Buenos Aires existió con anterioridad al dictado de la resolución 37/00 un doble status jurídico para los niños /niñas y adolescentes –

contraventores y no contraventores- que reflejaba una notoria discriminación entre ellos. En efecto, mientras los niños niñas y adolescentes cuya conducta pudiera derivarse en una contravención ocurrían por disposición de la autoridad preventora al Centro Contravencional sito en la calle Pillado 1057 (no correctivo, sino dependiente de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), aquéllos extraviados en la vía pública o fugados de su hogar, eran trasladados a las seccionales policiales y demorados en ellas .

Es decir, tal situación significaba que, niños, niñas o adolescentes que no habían incurrido en la comisión de delito, infracción o contravención alguna, se encontraban privados ilegítimamente de la libertad configurándose una flagrante violación a los derechos humanos en la persona de éstos.

Por el contrario, los niños, niñas y adolescentes por conductas que podrían calificarse de alguna contravención eran derivados a un Centro Contravencional, debidamente organizado y con personal especializado en temas de infancia y adolescencia, para la atención y contención de tales situaciones que, en su mayoría, se trata de cuestiones de carácter eminentemente sociales. Este Centro depende de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se advirtió con preocupación que, en la práctica, a los niños y adolescentes circunstancialmente alejados de sus familias por realizar distintas actividades propias de la edad se les otorgaba "un status jurídico inferior" al otorgárseles un tratamiento desigual y discriminatorio respecto de los niños y/o adolescentes infractores al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley nº 10, quienes no eran demorados en ninguna comisaría sino derivados en forma inmediata al Centro Contravencional

La situación de los niños y adolescentes detenidos en comisarías se agravaba si sus padres y/o representantes legales no concurrían a retirarlos en tiempo propio al disponerse ("disposición tutelar" y aplicación de la doctrina de la situación irregular) la institucionalización en institutos correctivos de acuerdo a sus edades (por ejemplo: los institutos más conocidos como el Roca, Belgrano, San Martín para varones y/o Pizarro y Monje)

b) Fundamento jurídico

Ante la visualización de esta injusta situación, debidamente analizada a la luz de la ley nº 114 y en especial atento lo dispuesto por su art. 43 que recepta expresamente el principio de desjudicialización de la pobreza, esta Asesoría General de Incapaces intervino en forma activa a fin de poner de denunciarla promoviendo las acciones correspondientes en defensa de los niños (art. 34 de la ley nº 21)

c) Extensión del ámbito de aplicación del Centro Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

No obstante la reunión mantenida por el Asesor General con los jefes de las comisarías de la Policía Federal Argentina, se llevaron a cabo todas las gestiones pertinentes a fin de obtener la extensión de la habilitación del Centro Contravencional sito en la calle Pillado 1057 de esta Ciudad para la ubicación, en forma urgente, temporaria y breve para que los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no contraventores pudieran ser ubicados allí hasta su egreso con su grupo familiar y/o alguna persona responsable.

Tal gestión arrojó resultados positivos por lo que se procedió, a la brevedad, dar a conocer la misma mediante el libramiento de sendos oficios dirigidos a todos aquellos organismos, públicos y privados, directamente comprometidos con la temática en cuestión y, de esa manera, hacer efectiva la protección inte-

gral de niños, niñas y adolescentes que la ley n° 14 introduce en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- **Resolución 57/00 de fecha 27 de junio de 2000**

- a) Derogación de Acordadas. Fundamentos.**

Esta Asesoría General de Incapaces tuvo conocimiento sobre la vigencia y plena operatividad de las Acordadas dictadas por la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal n° 837/87, de fecha 12 de noviembre de 1987, y N° 869/91 de fecha 12 de marzo de 1991 en virtud de las cuales se obligaba a los Directores de los Hospitales de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en consecuencia a todo el personal a su cargo (Servicio Social, Servicios de maternidad, etc) a poner en conocimiento del Defensor de Menores e Incapaces dependientes del Ministerio Público de la Nación en turno toda situación de abandono en la que se encuentre involucrado un menor de edad.

Tal normativa es palmariamente contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, herramienta normativa de rango constitucional a partir de la reforma de 1994 en su art. 75. Inciso 22, que dispone expresamente sobre el derecho a la convivencia familiar y a la preservación de dicho grupo social básico como lo es la familia (conf. arts. 8, 9 y 20), como así también de los art. 6, 25 y 26 de la ley n°14 que recepta estos derechos.

Asimismo, y amén de ser reiterativos, se viola un principio primordial en beneficio y protección de los niños, niñas y adolescentes como lo es la desjudicialización de la pobreza (art. 43) y, en consecuencia, la excepcionalidad de la institucionalización de niñas, niños y adolescentes.

Pero además conjuntamente con este grupo de herramientas normativas, plenamente operativas, se encuentra la última Acordada dictada por el organismo en cuestión que aprueba el Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil (N°980/99 de fecha 21 de diciembre de 1999) , cuya entrada en vigencia aconteció en fecha 1° de enero del 2000, que establece la derogación automática de todas las acordadas dictadas con anterioridad a su puesta en vigencia.

Es decir que las dos Acordadas en cuestión al no quedar exceptuadas de tal disposición (art. 270 del Reglamento mencionado) se encuentran perfecta y expresamente derogadas.

- b) Difusión de "Recomendaciones"**

Este análisis estrictamente normativo impulsó a esta Asesoría General de Incapaces a poner en conocimiento de tal situación a los organismos públicos y privados interesados mediante el dictado de la resolución en cuestión en la cual se consignaron las siguientes recomendaciones:

- a) Instar al cumplimiento de la ley n° 114 sobre la efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la convivencia familiar y a la preservación del grupo familiar procurando la excepcionalidad de la institucionalización de los mismos;
- b) Instar al cumplimiento de las leyes 22.431, 24.091 y art. 21 de la ley n° 114 en tanto se dispone la creación unidades de atención para tratamiento y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales;
- c) Instar a la difusión de las ex Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes que dependían de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, en la actualidad a partir de la reciente creación del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, pasan a depender de éste organismo de-

nominándose "Defensorías Zonales", a fin de receptar la demanda y prestar asistencia integral por cuestiones asistenciales que los Servicios Sociales de los Hospitales Públicos no puedan asumir.

c) Repercusiones de la Resolución 57/00

Los dos oficios recibidos por esta Asesoría General de Incapaces (Ver Anexo III) en fecha 10 de agosto y 29 de noviembre de 2000 dan cuenta de la favorable repercusión de la resolución 57/00.

c) 1- Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Dirección de Asistencia Legal de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires ha remitido a esta Asesoría General de Incapaces las actuaciones administrativas, fundamento jurídico del Memorandum enviado a todos los establecimientos asistenciales dependientes de esa Dirección General, que pone en conocimiento de la resolución 57/00 emanada de este organismo.

c) 2- Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de la Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de la Buenos Aires mediante contestación de oficio, adjuntó las actuaciones administrativas correspondientes del cual surge que todas las áreas integrantes de dicha Dirección General (Dirección General de Planeamiento, Dirección General de Educación de Gestión Privada, Dirección Área de Educación Primaria, Dirección del Área de Educación Inicial; Dirección de Área de Educación Especial, Dirección de Educación Adultos y Adolescentes, Dirección Área de Educación Media y Técnica y Dirección de Educación Artística) han tomado conocimiento de la resolución en cuestión.

• Resolución 67/00 de fecha 14 de agosto de 2000

a) Creación de comisión para estudios sobre modificaciones legislativas

El fundamento de esta resolución gira alrededor de tres cuestiones de directa incumbencia por parte de esta Asesoría General de Incapaces atento las funciones expresamente otorgadas por la ley n° 21.

Mediante la resolución de marras se crea una comisión para el estudio, análisis y elaboración de anteproyectos referentes a los siguiente temas:

Tribunales de Vecindad: Tal como surge de la cláusula transitoria desimosegunda apartado 5 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se dispone la creación de Tribunales de Vecindad en el ámbito de las Comunas a conformarse en breve.

Estos tribunales serán competentes para entender entre otras materias, sobre violencia familiar y protección de persona, cuestiones directamente relacionadas al ámbito de acción de esta Asesoría General de Incapaces.

Policía Judicial: El art. 125 inciso 3° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el art. 16 inc. 3° de la Ley 21 (Ley Orgánica del Ministerio Público de la ciudad Autónoma de Buenos Aires), faculta expresamente al Ministerio Público para dirigir la futura Policía Judicial.

"Abogado del Niño": En este último tiempo, en el ámbito académico, doctrinario y de proyectos legislativos se ha venido delineando la figura jurídica denominada "Abogado del Niño" cuya función reside en representar y brindar defensa técnica de los derechos individuales y protección de intereses colectivos y difusos que atañen a los niños, niñas y adolescentes atento la necesidad de contar con vías procesales para los casos que haya intereses contrapuestos entre padres e hijos.

b) Fundamento

El fundamento legal del mismo reside en lo dispuesto por los arts. 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 275 y 276 del Código Civil y arts. 2, 6, 17, 41 inc. c), 70 inc. f) y g) de la ley 114, entre otros.

- **Resolución N°69/00 de fecha 16 de agosto de 2000**

a) Programa de Prevención a la Victimización de Lactantes: Fundamento

Atento la preocupación de esta Asesoría General de Incapaces por el aumento progresivo de un problema psicosocial de extrema gravedad como lo es la violencia familiar, como así también la falta y/o deficiente prestación de servicios asistenciales especializados y en aras de desjudicializar las cuestiones preeminentemente sociales a través de la focalización y profundización en la prevención como un principio rector que condiciona las actividades que desarrolla este organismo.

En virtud de ello se procedió a obtener información e interiorizarse sobre el funcionamiento y desarrollo de un Programa de Prevención de la Victimización de Lactantes diseñado por una organización no gubernamental de reconocida trayectoria en el tema como lo es la "Fundación Ecosistemas Humanos".

Esta institución, en el marco de una investigación con el apoyo del CONICET, ha observado un conjunto reducido de indicadores que identificarían a las adolescentes/adultas embarazadas en riesgo de victimizar a sus bebés.

Esta actividad permite realizar intervenciones de carácter preventivo por medio de la implementación de un modelo de asesoramiento breve a cargo del mismo personal que detectan tales situaciones.

b) Programa de Prevención a la Victimización de Lactantes: Objetivos

Este programa tiene como objetivo general detectar una franja poblacional determinada (mujeres, adolescentes/adultas, embarazadas de riesgo) y aplicar una intervención preventiva. El desarrollo del mismo, en forma sintética, consiste en :

1. Reuniones con profesionales y personal del servicio hospitalario seleccionado para informar sobre el procedimiento.
2. Confección de una Base de Datos sobre el o los servicios involucrados.
3. Mediciones previas a la ejecución del Programa (evaluación ex ante).
4. Diseño de Protocolo de Índice de Riesgo.
5. Capacitación de los operadores para el uso del Índice de Riesgo en la admisión al servicio.
6. A. Capacitación de los operadores involucrados en la aplicación de una intervención preventiva.
B. Determinación de lugar, mecanismo, horarios y demás cuestiones administrativas.

7. Intervención Preventiva se puede desarrollar de tres formas diferentes:
 - A. Asesoramiento individual de 3 horas de duración y material bibliográfico informativo.
 - B. Asesoramiento grupal (hasta máximo de 6 integrantes) de dos reuniones de 2 hora cada una y material bibliográfico informativo.
 - C. Exposición a la población de Sala de Espera e Internación de videos basados en los contenidos y material bibliográfico informativo.
8. Seguimiento de las díadas madre-hijo de riesgo a los 4 meses de edad del niño cualquiera haya sido la forma de intervención recibida. Tal seguimiento comprenderá datos sobre la evolución del lactante y de los factores de riesgo detectados.

c) Programa de Prevención a la Victimización de Lactantes: Descripción

c).1- Antecedentes

Este Programa fue puesto en práctica como prueba piloto, y en el marco de la investigación mencionada, en el Servicio de Obstetricia del Hospital Donato Alvarez de esta ciudad en el período 1997/2000, el cual ha arrojado los siguientes datos estadísticos: de 300 mujeres que consultaron el mencionado servicio, se detectaron 40% con indicadores de riesgo a las cuales se le aplicó un modelo de asesoramiento breve. Comparado con un grupo de similares características se observaron diferencias considerables a favor del grupo sobre el que se intervino.

Para una mayor interiorización sobre dicho proyecto se llevó a cabo en esta Asesoría General de Incapaces una charla teórica en la que se brindó amplia información sobre el diseño, desarrollo y evaluación del mismo.

c). 2- Análisis pormenorizado. Trabajo de campo.

c).2.1- Recolección de información

A fin de analizar sobre la posibilidad/viabilidad de hacer extensiva tal experiencia a los servicios de obstetricia de otros hospitales de esta ciudad como un programa social con identidad y características propias, debidamente contrastado y probado, esta Asesoría General de Incapaces realizó durante el período abril-junio del 2000 un trabajo de campo consistente en el relevamiento de la situación actual de los hospitales públicos dependientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires focalizado en el tratamiento del maltrato infantil.

Con la supervisión en todo el período mencionado de la Lic. Marta Albarra-cín, en su carácter de presidenta de la Fundación Ecosistemas Humanos y autora del programa, se seleccionaron dos técnicas diferentes de recolección de datos:

- 1) elaboración de una encuesta- tipo para el registro unificado de la información obtenida y posterior comparación y evaluación de resultados
- 2) entrevistas con informantes claves
- 3) material bibliográfico actualizado (estadística) sobre la problemática del maltrato infantil.

Las encuestas fueron realizadas en los siguientes hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuentan con servicio de maternidad: Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Alvarez; Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich; Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand; Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, Hospital de Pediatría Dr. J. P Gahrahan; Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez; Hospital Municipal Dr.

Braulio Moyano; Hospital General de Agudos Dr. José Penna; Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero; Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano; Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía; Hospital General de Agudos Dr. Bernardino Rivadavia; Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni, Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Sardá, Hospital General de Agudos Dalmacio Velez Sarfield; Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta.

La tarea de recolección de datos ha sido encomendada a los empleados de esta Asesoría General de Incapaces, que, en distintos horarios preestablecidos y organizados, se dividieron los hospitales a visitar por zonas geográficas a fin de optimizar tal actividad.

c).2.2- Encuesta-formulario

El instrumento "ad hoc" utilizado permitió el relevamiento de los siguientes datos:

GENERAL: Nombre del Hospital, entrevistador y entrevistado (persona encargada del servicio de obstetricia y otro servicio afín al sector de maternidad);

PRESTACIONES: cantidad de partos (mensual), internaciones de otro tipo (mensual), consultas externas mensuales;

TIPO DE POBLACION: promedio edad de pacientes (de menores de edad y de incapaces), porcentaje de mujeres sin pareja, promedio nivel educacional, nivel socio-económico, porcentaje de extranjeras, porcentaje de migrantes internas, porcentaje de primíparas, promedio número de controles, promedio de las que no realizan controles, número de hijos, número entrega en adopción (anual) y número de abandonos (anual);

PERSONAL CON QUE CUENTAN: médicos, parteras, residentes, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, administrativos, voluntarios y pasantes;

VARIOS: lugar físico para reuniones, horario disponible, número de controles posparto obligatorios. Especificación sobre los siguientes datos: qué hacen si advierten: que la madre presenta un trastorno mental, que el bebé posee una malformación o discapacidad, que la madre rechaza o descuida al bebé, que la madre no sabe amamantar o lo descuida, voluntad de abandonar a su hijo; instrucciones que se le brinda a la madre cuando egresa (respecto de ella y respecto del bebé); implementación de un modelo de historia clínica o modificación del formulario estándar (agregar copia como así también tomar nota de los datos que habitualmente no se llenan); edición de folletería, cartillas u otro material bibliográfico (agregar copia); curso de posparto (obligatoriedad, duración, objetivos y contenidos); realización de seguimiento de madre y bebé después del parto (porcentaje de casos); posibilidad de hacerlo en mayor medida.

c).2.3- Reuniones con efectores: "Informantes claves"

En varias oportunidades se debió dejar por un lapso de tiempo determinado (no mayor a 10 días) las encuestas para ser completadas con mayor detenimiento y exactitud.

Tal situación permitió la realización de sendas reuniones llevadas a cabo en la Asesoría General de Incapaces con el propósito de hacer entrega de las encuestas respectivas como así también tomar contacto directo con funcionarios de la misma, interiorizarse sobre los inconvenientes en la labor cotidiana y lograr una vinculación más estrecha con los profesionales de la salud.

c) 2.4- Resultados y visualización de problemáticas diversas

En la mayoría de los casos la actividad consistió en mantener entrevistas "in situ" con los responsables de las áreas en cuestión para interiorizarlos sobre el programa y evaluar, a primera vista, sobre la posibilidad de una futura implementación.

Esta relación directa con el personal responsable a cargo de los servicios de obstetricia y/o neonatología y/u otros servicios íntimamente vinculados a la maternidad resultaron ser de gran valor a fin de tomar cabal conocimiento de las problemáticas y la dimensión de éstas en ámbitos que se encuentran directamente relacionados con los niños y adolescentes, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del conurbano de la Provincia de Buenos Aires.

De esa forma se obtuvo acceso a información adicional a la que se pretendía acceder mediante las encuestas que permitió visualizar un cúmulo de problemas que, amén de que varios de ellos eran ya conocidos, permitió un conocimiento más acabado y cierto sobre causa, fundamento, magnitud de los mismos como así también y específicamente, sobre el ámbito de competencia del sistema judicial.

Esta amplitud de perspectiva de los problemas resultó ser de gran utilidad como sustento fáctico en la reorganización y adecuación constante del trabajo de esta Asesoría General de Incapaces a fin de coadyuvar conjuntamente con otras instituciones para la solución de las problemáticas existentes partiendo de una percepción directa de las mismas.

Tanto las conclusiones derivadas de las conversaciones mantenidas en los hospitales como en la Asesoría General de Incapaces se encuentran debidamente documentadas a través de informes confeccionados posteriormente por el entrevistador y/o un partícipe de las mencionadas reuniones.

Estos informes conforman los datos secundarios, como una de las técnicas de construcción de muestras, que compone la etapa de evaluación de diagnóstico previa a toda implementación de programa y/o proyecto social.

c). 2.5- Inquietudes planteadas

Algunas de las inquietudes que se trataron en dichas reuniones fueron las siguientes:

- a) la gran cantidad de demanda de atención (rápido aumento de pacientes en los últimos años lo que produce desborde y caída en la calidad de la prestación de servicio) debido a factores socioeconómicos y al aumento de población inmigrante tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense;
- b) la escasez de servicios de atención -no de orientación- a la violencia familiar en los hospitales públicos ya que figuran y se difunden varios servicios pero sólo unos pocos brindan atención directa;
- c) la falta de recursos materiales básicos - espacio físico, fax, útiles varios, mobiliario, etc -;
- d) la obligatoriedad de denunciar ante el Defensor Público de Menores e Incapaces del Ministerio Público de la Nación en turno la gran cantidad de situaciones en las que se encuentran involucradas personas menores de edad sin sus representantes legales por estricta aplicación de las acordadas de la Cámara nacional de Apelaciones en lo Civil N°837/87 y N°869/91 (para un análisis más extensivo de las mismas remitirse a los fundamentos de la resolución N° 57/00 de esta Asesoría General de Incapaces vertidos en el presente informe anual) ;
- e) escasa vinculación con las Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes, en la actualidad dependientes del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- f) la dificultad para obtener el consentimiento expreso de los padres en los casos que sus hijos adolescentes en forma voluntaria desean realizarse el examen de H.I.V; elevada cantidad de indocumentados;

- g) los horarios reducidos de las delegaciones del Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los hospitales públicos, entre otros.

c) 2.6- Material complementario

Se solicitó al INDEC, al Centro de Estadística y Censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires material bibliográfico, principalmente de tipo estadístico, sobre distintos temas relacionados a la infancia y adolescencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ser: cantidad de población por grupo poblacional etéreo; cantidad de nacimientos; mortalidad y morbilidad infantil; cantidad de denuncias por violencia familiar (maltrato y abuso sexual infantil); escolaridad, etc, anualmente, tanto en forma general como por áreas programáticas en las que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Programa de Prevención para la Victimización de Lactantes: Su posible implementación

En la actualidad, esta Asesoría General de Incapaces se encuentra en tratativas con la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que, por su intermedio, se implemente el Programa descrito al considerar que es una herramienta valiosa hacia una disminución del maltrato infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A tal fin esta Asesoría General de Incapaces, mediante el dictado de la resolución N°69/00, creó una comisión para la implementación, articulación, monitoreo y evaluación del Programa de Prevención a la Victimización de Lactantes en establecimientos asistenciales dependientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrada por personal del mencionado organismo, de esta Asesoría General de Incapaces y del único Asesor Tutelar de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario en funciones en la actualidad.

Conjuntamente con la Lic. Marta Albarracín, se ha analizado la posibilidad de implementarse el Programa de Prevención a la Victimización de Lactantes (diseñado a partir de una investigación realizada con el apoyo del CONICET) en los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tal preocupación se centra en el interés de focalizar en el desarrollo de actividades tendientes a la promoción de acciones positivas de tipo preventivas, en especial si se trata de prevención primaria como lo sería la ejecución de un Programa como el mencionado.

En consecuencia, se creó una comisión de enlace entre personal de esta Asesoría General de Incapaces y de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para, en forma conjunta, analizar, rediseñar, implementar y evaluar el Programa de Prevención de Victimización de Lactantes.

• Resolución 97/00 de fecha 27 de octubre de 2000

a) Fundamento

En la actualidad, y hasta tanto el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcione en forma plena, el Consejo Nacional del Menor y la Familia es el órgano responsable de proveer protección integral de niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional y local.

La colaboración con dicho organismo implica el desarrollo de una actividad por parte de esta Asesoría General de Incapaces que se halla dentro del marco de su competencia al constituir una acción que satisface el interés social.

La resolución en cuestión deja sentada la realización de una actividad conjunta entre esta Asesoría General de Incapaces y el Consejo Nacional del Menor y la Familia consistente en la elaboración, publicación y posterior difusión masiva de una Guía Básica de Recursos Sociales, tanto concerniente al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la Provincia de Buenos Aires, a fin de facilitar y optimizar la labor de los Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales que desarrollan actividades de alto contenido social en las áreas mencionadas.

b) Guía Básica de Recursos Sociales

La Guía Básica de Recursos Sociales, cuya copia se adjunta (Ver Anexo IV) se encuentra en etapa de impresión a cargo del Consejo Nacional del Menor y la Familia.

- **Resolución 98/00 de fecha 27 de octubre de 2000**

a) Programa de Prevención del Maltrato y Abuso sexual Infantil

Atento la real preocupación por el fenómeno psicosocial que implica la violencia, maltrato y abuso sexual infantil ya expresada en párrafos anteriores y ante la necesidad de contar a la brevedad con la puesta en marcha de programas sociales para prevención y erradicación de dichas problemáticas se llevaron a cabo gestiones con representantes de la Secretaría de Educación a fin de realizar acciones conjuntas a tal fin.

Ello en virtud de considerar que el ámbito escolar es el más propicio para la detección precoz y prevención de las problemáticas referidas.

b) Marco jurídico

En consecuencia, se resolvió la elaboración de un convenio de colaboración entre esta Asesoría General de Incapaces y la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es diseñar, implementar, articular y evaluar un Programa para la prevención y erradicación del maltrato y abuso sexual infantil a desarrollarse en los establecimientos educativos dependientes de la mencionada Secretaría.

- **Resolución N° 117/00 de fecha 27 de noviembre de 2 000**

Que por Decreto N° 1760 de fecha 13/10/00, B.O N° 1 052 de fecha 20/10/00 se ha designado la Dirección Ejecutiva del Consejo de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya presidencia a recaído en la Prof. María Elena Naddeo y la vicepresidencia en la Sra.Dora J. Martino.

En comunicación fehaciente por parte de dicho organismo a esta Asesoría General de Incapaces se ha solicitado la designación de la persona que lo representará en el Plenario de conformidad con lo dispuesto por el art. 49 inciso k) de la ley n° 114.

A tal fin y por resolución debidamente fundada, se designó a la Asesora General Adjunta, la Dra. María de los Angeles Baliero de Burundarena a representar a esta Asesoría General de Incapaces ante el Consejo de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, autoridad de aplicación de la ley n° 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II.3 "Inhabilitados e Incapaces" y la ley 448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

II.3.1- Consideraciones preliminares

Tal como surge del art. 34 incisos 3, 4, 5 y 8 de la ley 21 velar por la protección integral de los "inhabilitados e incapaces" también es competencia de esta Asesoría General de Incapaces.

Se prefiere la denominación de "enfermos mentales" y no de incapaces ya que, atento lo dispuesto por el art. 54 y 55 del Código Civil, tanto los menores de edad como los inhabilitados e insanos técnicamente son incapaces (de hecho absoluto y/o relativo según el caso).

Seguido a esta acotación, parece relevante poner de resalto que es de reciente data la ley N°448 sobre Salud Mental (27 de julio de 2000), por lo tanto todas las actividades vinculadas al mismo se encuentran en una primera etapa (diseño y elaboración).

Esta aclaración no es óbice para consignarse un breve resumen sobre las tareas que se están ideando para su posterior transformación en acciones positivas en el ámbito extrajudicial para la efectiva protección de un sector de la población altamente vulnerable como el de los enfermos mentales.

II.3.2- Fundamento jurídico

Tal como lo dispone la ley n°448 surge en forma expresa la actuación de esta Asesoría General de Incapaces para colaborar activamente en la reglamentación de la ley en cuestión.

El art. 6 en su último párrafo expresa *"La autoridad de aplicación, invitará al Poder Judicial y a la Universidad de Buenos Aires a integrarse al Consejo Nacional"*.

El art. 9 enumera en varios incisos los lineamientos generales y acciones en la conducción, regulación y organización del Sistema de Salud Mental. Específicamente su inciso j) precisa sobre *"La coordinación intersectorial e interinstitucional con las áreas y sectores de promoción social, trabajo, educación, Poder Judicial, religiosas, policía, voluntariados, ONGs, organizaciones barriales y otras"*.

Asimismo, en varios articulados de esta ley se menciona la intervención del "Asesor de Menores e Incapaces" que, realizado el traspaso del fuero de Familia, pasará a depender directamente de esta Asesoría General.

Veamos, los art. 32, 44 y 46, en su parte pertinente y respectivamente expresan: en referencia a las internaciones voluntarias: *"La internación de niños, niñas y adolescentes en los términos de la ley N°114, y la de incapaces, deberán ser comunicada, dentro de las 72 horas de producida, al Asesor de Menores e Incapaces"* y con relación a las internaciones judiciales: *"Los niños, niñas y adolescentes internados que no registrren la presencia de un grupo familiar de pertenencia, en caso de alta, dentro de las 72 horas serán derivados a la institución intermedia que corresponda, en los términos del art. 15 de la presente ley y de la Ley N°114, previa comunicación al Asesor de Menores e Incapaces ", " Las salidas y permisos especiales serán decididas en función del curso de tratamiento, debiendo ser comunicados a los familiares responsables o tutores responsables, Asesoría de Menores e Incapaces o juez..."*.

II.3.3- Preocupaciones explícitas/ Actividades propuestas

Como primera actividad a desarrollar en forma conjunta con los efectores que la ley n°448 se encuentra la reglamentación de la ley en cuestión. A tal fin se ha tomado contacto con la presidenta de la comisión de salud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Lic. Clori Yelisc a efectos de participar de las reuniones que se están llevando a cabo para el debate sobre distintas propuestas para reglamentar la ley de Salud Mental.

Asimismo se tiene contacto directo con el director de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Roberto D. Lo Valvo a fin de interiorizarnos sobre la implementación y funcionamiento de los organismos que la ley estructura.

Paralelamente a ello, esta Asesoría General de Incapaces está llevando a cabo un análisis pormenorizado, desde el punto de vista estrictamente jurídico, sobre la ley n°448 en relación a los efectos jurídicos de la ley N°22.914 de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adoptándose como punto de partida el siguiente interrogante: ¿ armonización y/o derogación?. A tal fin se confeccionó un cuadro comparativo entre ambos instrumentos normativos. (Ver Anexo V).

En materia de enfermos mentales la preocupación primaria de esta Asesoría General de Incapaces reside en proporcionar respuestas rápidas y efectivas a la cantidad de personas que se encuentran internadas en instituciones neuropsiquiátricas.

Atento el traspaso de los Hospitales Dr. José T. Borda y Dr. Braulio Moyano a la órbita de la Secretaría de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se considera de vital importancia la promoción de acciones conjuntas entre dicho organismo, la Secretaría de Promoción Social dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta Asesoría General de Incapaces para descomprimir y evitar el colapso del sistema hospitalario especializado (entre ambos nosocomios hay alrededor de 3.000 camas) a partir del desarrollo de actividades que tengan como finalidad primordial el restablecimiento de las obligaciones familiares y posterior fortalecimiento de tales vínculos en aras del pronto egreso hospitalario como medida ineludible para su protección.

Es indudable que todo programa social que se diseñe e implemente deberá establecer expresamente la imperiosa necesidad de contar con la participación activa del grupo familiar de los enfermos mentales.

Es de suma utilidad que, entre los tres organismos mencionados ut-supra en forma conjunta, evaluaran la posibilidad de crearse un programa para Grupos de Autoayuda (o ayuda mutua) destinado a familiares y/o curadores de personas con discapacidad mental.

Asimismo se advierte la cruda realidad sobre el aumento progresivo en estos últimos años de las personas que viven en la calle con trastornos mentales y/o personas que egresan de neuropsiquiátricos sin contención familiar alguna.

Esta Asesoría General de Incapaces está convencida que las investigaciones socio jurídicas configuran una herramienta de vital importancia para la toma de decisiones en materia de planificación de programas sociales al proporcionar un análisis detallado sobre la dimensión de la problemática en cuestión.

Las mismas nos permiten visualizar la real magnitud del problema, nos acerca a sus posibles causas y, por ende, a contar con una idea más cierta sobre las posibles vías de solución.

Se encuentra en etapa de elaboración, como actividades complementarias para el abordaje de las problemáticas que atañen a los enfermos mentales, la organización de congresos, seminarios y talleres con la participación de profesionales de distintas disciplinas especializados en la temática que incentive el intercambio, tanto teórico como experimental, como así también la difusión e información de las problemáticas en cuestión para el logro de la concientización de las mismas.

II.3.4- Conclusiones

En resumen y tal como surge de lo expresado, no cabe duda alguna sobre la importancia del despliegue de acciones positivas por parte del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en especial, la Asesoría General de Incapaces) en el ámbito extrajudicial como conjunto de actividades que velan por satisfacción del interés social, en última instancia y por brindar una real protección integral a sus representados, niños, niñas, adolescentes y enfermos mentales de la ciudad de Buenos Aires.

No se puede concluir este ítem sin dejar debidamente sentado que tal despliegue no pudo, ni puede, desarrollarse de manera eficaz y efectiva si se afronta de manera autónoma o solitaria. Por lo contrario, se aprecia la necesidad imperiosa de aunar fuerzas entre los distintos efectores sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el logro del fin último e ideal propuesto: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta Ciudad.

III- ACTIVIDADES DE EXTENSION INTERINSTITUCIONAL DE LA ASESORIA GENERAL DE INCAPACES

Este apartado contine un breve resumen de distintas actividades llevadas a cabo por esta Asesoría General de Incapaces que coadyuva a jerarquizar y optimizar su labor cotidiana. Entre éstas se destacan:

III.1- Vinculación con Embajadas

Con la intermediación del Señor Vicanciller Dr. Enrique Candiotti, se han remitido notas de presentación a fin de poner en conocimiento de las embajadas sitas en el país sobre las tareas que esta Asesoría General de Incapaces desarrolla como una entidad autónoma, encuadrada en el marco institucional del Poder Judicial de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fundamento de las mismas residió en considerarse de suma importancia dar a conocer la existencia y el funcionamiento de este organismo en virtud a lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y la ley n°21.

Asimismo, se estimó de utilidad entablar una relación directa con éstas a fin de intercambiar experiencias como así también tomar conocimiento sobre la organización de sus áreas concordantes con la expresa intención de trabajar en forma conjunta por los niños, niñas, adolescentes e incapaces de esta Ciudad.

Los oficios enviados y sus respectivas contestaciones fueron los siguientes:

- Embajador de la República de Albania (12/01/00).
- Embajador de la República Federal de Alemania (12/01/00). Contestado en fecha 15 de febrero de 2000 en el cual se expresa que en Alemania no existe un organismo equiparable o similar a esta Asesoría General de Incapaces.
- Encargado de Negocios de la Oficina Popular de la Gran Yamahiria Arabe-Libia Popular Socialista (01/02/00).

- Encargado de Negocios y Ministro Plenipotenciario de la República Árabe Siria. (12/01/00).
- Embajador del Reino de Arabia Saudita (12/01/00).
- Embajador de la República de Armenia (12/01/00).
- Embajador de la República Democrática y Popular de Argelia (12/01/00). Contestado en fecha 27 de enero de 2000 en el que se adjunta legislación, jurisprudencia sobre infancia y adolescencia y la constitución Nacional.
- Embajador de Australia (12/01/00).
- Embajador de la República de Austria (12/01/00). En su contestación adjunta material sobre el sistema político de Austria, la seguridad social de Austria y "Austria: hechos y cifras".
- Embajador del Reino de Bélgica (12/01/00).
- Embajador de la República de Bolivia (12/01/00).
- Embajador de la República Federativa del Brasil. (12/01/00).
- Embajador de la República Popular de Bulgaria. (12/01/00).
- Embajador de Canadá (12/01/00).
- Embajador de la República de Colombia (12/01/00).
- Embajador de la República Democrática del Congo (01/02/00).
- Embajador de la República de Corea (01/02/00). Contestado en fecha 8 de febrero de 2000.
- Embajador de la República de Costa Rica (01/02/00).
- Embajador de la República de Croacia (01/02/00).
- Embajador de la República de Cuba (01/02/00).
- Embajador de la República Federativa Checa (12/01/00).
- Embajador de la República de Chile (12/01/00).
- Embajador de la República Popular de China (12/01/00).
- Cónsul General de la República de Chipre (12/01/00).
- Embajador del Reino de Dinamarca (01/02/00). Contestado en en fecha 01 de marzo de 2000 adjuntándose folleto sobre Política Social Danesa.
- Embajador del República del Ecuador (01/02/00).
- Embajador de la República Árabe Egipto. (01/02/00).
- Embajador de la República de El Salvador (01/02/00). Contestado en fecha 09 de febrero de 2000 adjuntado material sobre legislación de El Salvador.
- Embajador de la República Eslovaca (01/02/00).
- Embajador de España (01/02/00).
- Embajador de la República de Eslovenia (01/02/00).
- Encargado de Negocios a. i. de los Estados Unidos de América (01/02/00). Contestado en fecha 22 de febrero de 2000, en el cual manifiesta la puesta a disposición de esta Asesoría General de Incapaces de los servicios del Centro de Recursos Informativos de la Embajada.
- Embajador de la República de Filipinas (01/02/00).
- Embajador de Finlandia (01/02/00).
- Embajador de la República de Francia (01/02/00). Contestado en el mes de febrero de 2000 en el que se adjunta material referido a la justicia de menores en Francia.
- Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (01/02/00).
- Embajador de la República Helénica (01/02/00).
- Embajador de la República de Guatemala. (01/02/00).
- Embajador de la República de Haití. (01/02/00).
- Embajador de la República de Honduras (01/02/00).
- Embajador de la República de Hungría (01/02/00).
- Embajador de la República de la India (01/02/00).
- Embajador de la República de Indonesia (01/02/00).
- Encargado de Negocios de la República Islámica de Irán (12/01/00).
- Embajador del Estado de Israel (01/02/00). Contestado en fecha 9 de febrero de 2000, en el que se adjunta material sobre: "Estructura Política y Elecciones"; "El contralor del Estado y el Comisionado de Quejas del Público, el

Sistema Judicial , Derechos Humanos" y "El Gobierno de la Ley y Gobierno Local."

- Encargado de Negocios de Irlanda (01/02/00).
- Embajador de la República de Italia (01/02/00). Contestado en fecha 07 de marzo de 2000 en el que se adjunta material relacionado con el Defensor Cívico Italiano.
- Embajador del Japón (01/02/00).
- Embajador del Estado de Kuwait (01/02/00). Contestado y en el cual se adjunta una carpeta con la ley que establece una Autoridad Pública para los asuntos del Menor en Kuwait y un film documental explicativo de la misión humanitaria de esa Autoridad.
- Embajador de la República del Líbano (01/02/00).
- Embajador de Malasia (01/02/00).
- Embajador de la Soberana Orden Militar de Malta (12/01/00).
- Embajador del Reino de Marruecos (01/02/00).
- Embajador de los Estados Unidos de México (01/02/00). Contestado en fecha 2 de agosto de 2000, adjuntando información sobre legislación mexicana relacionada al ámbito de la justicia de menores.
- Embajador de la República de Nicaragua (01/02/00).
- Encargado de Negocios de la República Federal de Nigeria (01/02/00).
- Embajadora del Reino de Noruega (01/02/00). Contestado en fecha 15 de marzo de 2000, adjuntando información sobre el Defensor del Menor de Noruega.
- Consul Honorario de Nueva Zelanda (12/01/00).
- Embajador del Reino de los Países Bajos (12/01/00). Contestado en fecha 8 de febrero de 2000 en el cual se adjunta información sobre "Public Prosecution Service" y "The Court System in the Netherlands".
- Embajador de la República Islámica de Paquistán (12/01/00).
- Representante y Jefe de la Misión de Palestina (12/01/00).
- Embajador de la República de Panamá (12/01/00).
- Embajador de la República del Paraguay (12/01/00).
- Embajador de la República del Perú (12/01/00).
- Embajador de la República Popular de Polonia (12/01/00).
- Embajador de la República de Portugal. (01/02/00).
- Embajador de la República Dominicana (12/01/00)
- Embajador de Rumania (12/01/00).
- Embajador de la Federación de Rusia (12/01/00).
- Consul General Honorario del Estado Independiente de Samoa Occidental (12/01/00).
- Consul General Honorario de la República de Singapur (12/01/00).
- Encargado de Negocios de la República de Sudáfrica (12/01/00).
- Embajador del Reino de Suecia (12/01/00). Contestado en fecha 9 de febrero de 2000 adjuntándose información relativa a la Seguridad Social en Suecia y a la Asistencia a las personas mayores, a los niños y a los minusválidos.
- Embajador de la Confederación Suiza (12/01/00).
- Embajador del Reino de Tailandia (12/01/00).
- Director de la oficina Comercial y Cultural de Taipei - Taiwán (12/01/00).
- Embajador de la República de Túnez (12/01/00).
- Embajador de la República de Turquía (12/01/00).
- embajador de la República de Ucrania (01/02/00).
- Embajador de la República Oriental del Uruguay (01/02/00). Contestado en fecha 26 de julio de 2000, en el cual se adjunta información sobre normas de actuación y protección de justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad.
- Embajador de la República de Venezuela (01/02/00).
- Embajador de la República Socialista de Vietnam (01/02/00).
- Embajador de la República Federal de Yugoslavia (01/02/00).

- Embajador de la República de Zaire (12/01/00).

III.2- Red Investigativa Internacional de la Niñez

La Red Investigativa Internacional de la Niñez es una red de trabajo sin fines de lucro y no gubernamental formada por instituciones (25 hasta la actualidad) e individuos interesados en la investigación de la niñez cuya sede central se encuentra situada en la ciudad de Oslo, Noruega.

Los objetivos de la red, entre otros, consisten en:

- Iniciar y coordinar la búsqueda de información acerca de las condiciones de vida de los niños y sobre la implementación de los derechos de los niños.
- Discutir sobre las nuevas necesidades, complementando las decisiones internacionales conjuntamente con las investigaciones de la comunidad. A tal fin se reúnen cada 3 años para discutir y analizar y evaluar los proyectos en curso.
- Promover la investigación enfocada en el texto de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
- Divulgar los resultados de las investigaciones sobre los niños a los estamentos políticos y otros sectores sociales de decisión de las políticas generales
- Promover la inclusión de la visión y opinión de los niños en las decisiones que los afecten.
- Divulgar los resultados de las investigaciones sobre los niños a los estamentos políticos y otros sectores sociales de decisión de las políticas generales
- Facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de búsqueda en los países que pretenden desarrollar instituciones nacionales y regionales.
- Brindar cooperación intergubernamental, no gubernamental y con organizaciones nacionales y de esta manera apoyar sus trabajos benéficos e incentivar distintas actividades relacionadas con la niñez.
- Organizar conferencias a cargo de expertos sobre temas selectivos que traten el desarrollo de nuevas iniciativas en investigación.

Del listado meramente enunciativo sobre los objetivos de la Red en cuestión surge palmariamente su importancia para la defensa y protección de derechos de niños y adolescentes.

En consecuencia, y tras un estudio pormenorizado sobre el funcionamiento de la misma, esta Asesoría General de Incapaces se encuentra realizando las gestiones pertinentes a fin de que, para el caso de cumplir con las requisitos correspondientes, sea admitido como integrante de la Red en cuestión.

III.3- Invitación a participar en reuniones mensuales con las/os representantes de los Servicios Sociales de los Hospitales Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El señor director de la Dirección de Asistencia Médica, de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Elías Hurtado Hoyos, a través de la coordinadora de los Servicios Sociales de los Hospitales Públicos dependientes del organismo mencionado, Lic. Silvia Del Mazo nos hizo llegar expresa invitación a participar de sus reuniones mensuales que se llevan a cabo los últimos jueves de cada mes en los diferentes nosocomios.

Esta Asesoría General de Incapaces, por intermedio de su Asesora General Adjunta, no sólo ha estado presente en varias de las reuniones en cuestión sino que además ha brindado charlas sobre los fundamentos, como así también para informar y difundir la Resolución n° 57/00 dictada por este órgano.

III.4- Acta- Acuerdo entre la Dirección General de la Mujer de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Educación de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asesoría General de Incapaces

Se encuentra próximo a suscribirse un acta acuerdo entre la Dirección General de la Mujer dependiente de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Coordinadora General de Orientación y Salud Escolar de la Dirección General de Educación dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta Asesoría General de Incapaces para la realización en forma conjunta de una campaña para la prevención primaria de la violencia familiar y abuso sexual infantil.

La campaña en cuestión consistirá en una amplia difusión publicitaria a través de afiches callejeros, trípticos informativos y adhesivos. Estos últimos serán a serán pegados en forma obligatoria en los cuadernos de comunicaciones de los alumnos que concurren a establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

III.5- Acta- Acuerdo entre la Dirección General de Educación de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asesoría General de Incapaces

A pedido de la Lic. Susana Ortiz, coordinadora general de Orientación y Salud Escolar de la Dirección General de Educación de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a propuesta de la Dra. María de los Angeles Baliero de Burundarena en su carácter de Asesora General Adjunta de la Asesoría General de Incapaces, se ha consensuado sobre la suscripción de un acta acuerdo a fin de otorgar respuestas encuadradas dentro de la normativa vigente a los requerimientos e inquietudes de los integrantes de los Equipos de Orientación Escolar.

Tales inquietudes podrán referirse a distintas temáticas jurídicas, como ser: ley 23.264 sobre Patria Potestad y Filiación; ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, ley n°114 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, ley n°203 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etc.

A tal fin se suscribirá el marco normativo pertinente (acta-acuerdo) en el cual se estipularán reuniones mensuales para evacuar las inquietudes jurídicas que pudieren expresar las coordinadoras de los Equipos de Orientación Escolar de la Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

III.6- Acta- Acuerdo entre la Universidad de Morón y la Asesoría General de Incapaces

Atento la importancia de incentivar políticas y programas sociales focalizados en la prevención, en especial de de tipo primaria, se encuentra en etapa preliminar la suscripción de una acta acuerdo entre la Universidad de Morón y la Asesoría General de Incapaces a fin de que ésta última brinde un curso de capacitación en el primer cuatrimestre del año 2001 sobre las siguientes temáticas: adicciones y alcoholismo; anorexia y bulimia; violencia y abuso sexual infantil y los procesos familiares dirigido a maestros, profesores de secundario y universitario y directivos de establecimientos escolares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.

El mismo estará a cargo de renombrados docentes de distintas disciplinas afín a los temas consignados y de la Dra. María de los Angeles Baliero de

Burundarena y la Dra. Cecilia de Villafañe, Asesora General Adjunta y Secretaria Letrada respectivamente, de esta Asesoría General de Incapaces.

La actividad académica descrita en forma somera es complementaria a la campaña de prevención mencionada en el apartado precedente.

III.7- Seminario de Capacitación

La Asesoría General de Incapaces organizó un seminario de capacitación denominado "Los conflictos en las relaciones familiares y su interacción con el sistema judicial" a cargo de la Lic. Sara B. Jutorán.

La coordinación del mismo estuvo a cargo del Centro de Formación Profesional del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se llevó a cabo en el salón de actos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días miércoles en el horario de 15.00 a 17.00 horas, con una duración de 12 clases (24 horas) con fecha de inicio el 3 de mayo del 2000.

El Seminario se dirigió a profesionales del derecho, la psicología o las ciencias sociales con prioridad para magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios judiciales, tanto de Nación como de la Ciudad de Buenos Aires, e integrantes de la red de Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

El temario abordado fue el siguiente:

- Nuevos desarrollos teóricos aplicados a los sistemas familiares
- Teoría General de los Sistemas. Cibernética de 1er y 2do orden
- Fundamentos de la Teoría de la Comunicación
- Procesos comunicaciones y reglas familiares
- Estructuras familiares
- Redes trigeneracionales
- Ciclo vital de la familia
- Las crisis como facilitadoras del cambio
- El genograma como instrumento de análisis
- Las nuevas organizaciones familiares
- Familias ensambladas
- Familias uniparentales
- Violencia Familiar
- Maltrato y abuso de los niños
- Los procesos del divorcio y del post-divorcio
- El profesionales en la tarea interdisciplinaria: El profesional y la voz de los niños
- Creencias y prejuicios
- La relación profesional con los miembros de la familia

La evaluación final consistió en la entrega de un trabajo final con nota la cual quedó plasmada en el certificado correspondiente.

III.8- Congreso "Ministerio Público 2000"

El Congreso de "Ministerio Público 2000" se realizó en la ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis los días 17, 18 y 19 de mayo de 2000.

En la comisión designada con la letra B sobre "El Ministerio Pupilar y de Menores", además de estar presente esta Asesoría General de Incapaces mediante la participación de dos funcionarios, la Dra. Cecilia de Villafañe, en su carácter de Secretaria Letrada y el Dr. Gustavo Daniel Moreno quien por enton-

ces se desempeñaba como Prosecretario Administrativo; se presentaron dos ponencias sobre " La intervención del Defensor de Incapaces en procesos judiciales de personas no declaradas insanas" y "El Defensor/ Asesor de Menores y el resguardo del interés superior" (con relación al Proyecto del Código Civil y Comercial Unificado).

En el marco del presente Congreso se ha dictado la "Declaración de San Luis", tal como se transcribe en la primera parte del presente informe anual.

III.9- Disertación de la Asesora General Adjunta en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Asesora General Adjunta, Dra. María de los Angeles Baliero de Burundarena fue invitada por la presidenta de la comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Prof. María Elena Naddeo, a disertar en el Foro "Los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Hacia la implementación de la Ley 114".

El mismo se realizó el día 28 de junio del 2000 en los salones San Martín y Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los temas abordados en el marco de la ley n° 114 fueron:

- Lineamientos principales e implementación.
- Organismos de aplicación: el Consejo de Derechos y las Defensorías Zonales.
- Prioridades en las Políticas Públicas de infancia y adolescencia.
- La desinstitucionalización de las problemáticas sociales, revinculación familiar y resolución alternativa de conflictos.
- La constitución de redes barriales, el papel de las Defensorías Zonales y las Organizaciones No Gubernamentales.

En el panel de cierre, conjuntamente con la Dra. Cecilia Maiza (titular del Juzgado de Menores N°4 de Capital Federal); el Lic . Norberto Alayón (vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires) y la Dra. Noris Pignata (ex coordinadora de la Red de Defensorías de la Ciudad de Buenos Aires y actual coordinadora del Circuito de Atención a Jóvenes en Conflicto con la ley penal del Consejo Nacional del Menor y la Familia), la Dra. Burundarena consolidó a partir de su exposición un aporte operativo para la aplicación de la ley n° 114 a partir del dictado de la Resolución N°57/00 por la Asesoría General de Incapaces a fin de instar el cumplimiento de ese ordenamiento por encontrarse derogadas las Acordadas N°837/87 y N°869/91 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y en virtud a lo dispuesto por el art. 270 del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil en vigencia a partir de enero del 2000.

III.10- Invitación de la Universidad de Tel Aviv a integrar mesa redonda

La Asesora General Adjunta había sido invitada a participar en la mesa redonda sobre "El sistema Judicial y la Violencia Familiar: un enfoque comparado argentino-israelí" a cargo de la profesora israelí Zahava Solomon, directora del Centro Adler para el Bienestar y la Protección del Niño, de la Escuela Bob Shapell de Asistencia Social de la Universidad de Tel Aviv y miembro del Consejo de Educación Superior de Israel.

Tal evento debió ser suspendido atento la imposibilidad de viajar de la prof. Solomon debido a las circunstancias por las que atraviesa su país, Israel.

IV- ACTIVIDAD INTRAINSTITUCIONAL DE LA ASESORIA GENERAL DE INCAPACES

IV.1- Propuesta de modificación del Reglamento Interno del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de la Buenos Aires

IV.1.1- Fundamento

Con el dictado de la resolución 2/00 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó el Reglamento interno del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De su estudio pormenorizado surgieron posibles modificaciones a dicho instrumento, las que fueron puestas en conocimiento por esta Asesoría general de Incapaces mediante resolución N°31/00. (Ver Anexo VI)

IV.1.2- Modificaciones propuestas

Las modificaciones propuestas fueron las siguientes:

El punto 3.2 del referido Reglamento establece que a la autoridad de aplicación para otorgar las licencias, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de la Buenos Aires, se le eleve todos los pedidos de licencia, debidamente fundados.

El punto 3.3 dispone que los pedidos de licencia deben formularse por el agente, siguiéndose la vía jerárquica, con una anticipación no menor a 3 (tres) días sin que pueda hacerse uso de la licencia solicitada mientras no haya sido expresamente acordada y notificada al interesado, salvo casos excepcionales.

En la práctica, el despliegue de tal actividad administrativa se torna de difícil cumplimiento atento al escaso tiempo que transcurre entre la elevación de la solicitud pertinente y la concesión de la misma. Tal situación perjudica al interesado al encontrarse imposibilitado de gozar la licencia durante el lapso solicitado por ser otorgada y notificada en tiempo posterior a la fecha pedida.

En consecuencia, esta Asesoría General de Incapaces emitió una resolución en la cual se propuso que se adopte el criterio seguido en los regímenes de licencia del Poder Judicial de la Nación (Acordada de la CSJN N°34/77), de la Procuración General de la Nación (Resolución PGN N°66/98) y de la Defensoría General de la Nación (Resolución N°1973/99) por el cual, cada titular de dependencia decide las solicitudes de licencia que no excedan de 30 (treinta) días por parte de los funcionarios y empleados a su cargo.

Paralelamente, y a modo de colaboración con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta que se resuelva la cuestión de fondo planteada, se sugirió que las licencias presentadas por los integrantes de la Asesoría General de Incapaces y que no superen los 5 (cinco) días corridos de extensión, sean dirimidos por el Asesor General de Incapaces según los criterios plasmados en el Reglamento Interno del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicando en forma fehaciente e inmediata a la Presidencia del Consejo de la Magistratura la decisión adoptada.

IV.2- Anteproyectos: Tribunales de Vecindad y Policía Judicial

La resolución N°67/00, mencionada sintéticamente en párrafos anteriores, crea la comisión correspondiente para la confección de anteproyectos, entre otros, sobre Tribunales de Vecindad y Policía Judicial.

a) *El Anteproyecto sobre Tribunales de Vecindad*

Tal como surge de la copia que se adjunta al presente informe anual, se encuentra concluido para su elevación, conjuntamente con sus fundamentos, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su correspondiente estudio . (Ver Anexo VII).

b) El Anteproyecto sobre Policía Judicial

El mismo se encuentra en preparación. Como punto de partida hacia un estudio profundo sobre esta temática se procedió a recabar información sobre su tratamiento en las distintas legislaciones provinciales. A tal fin se adjunta un cuadro comparativo como síntesis de la labor que se está desarrollando. (Ver Anexo VIII)

IV.3- Curso de Capacitación Interna

IV.3.1- Introducción

Desde el mes de junio y hasta el mes de noviembre del año 2000 se lleva a cabo en dependencias de esta Asesoría General de Incapaces un curso de capacitación destinado a todos los integrantes de la misma (funcionarios y personal) a cargo de la Lic. Sara B. Jutorán, psicóloga especializada, entre otras materias, en formación de equipos de trabajo.

El mismo se desarrolla una vez por semana con una duración de 2 hs los días miércoles de 13.00 a 15.00 hs.

IV.3.2- Objetivos

Los objetivos del programa de capacitación son:

- 1) Facilitar la cohesión grupal en base a metas claras a partir de las diferentes funciones de cada uno de los miembros.
- 2) Acrecentar la motivación para la creatividad en los procesos generadores de ideas, propuestas y soluciones.
- 3) Organizar un contexto de trabajo en el que la competencia esté al servicio de la excelencia, en un clima de respeto y compañerismo.
- 4) Brindar conceptos teóricos fundamentales para una comprensión de los sistemas familiares en interrelación con los contextos sociales donde se presentan las necesidades, problemas y/o conflictos. Como ser:
 - Circularidad de la comunicación en los sistemas humanos. Concepto de feedback como corrección del error y como promotor del cambio
 - Los sistemas humanos como estructuras en evolución
 - La comunicación digital y analógica
 - Reglas que organizan los sistemas
 - Subsistemas, fronteras y jerarquías
 - El diseño de proyectos en módulos operativos reticulares interconectados bidireccionalmente.
- 5) Desarrollar Proyectos concretos:
 - Evaluación de organismos, instituciones y proyectos existentes
 - Elaboración focalizada en la coparticipación de las familias
 - Exploración de los recursos personales de miembros de las familias para interactuar con los profesionales a cargo
 - Puesta en práctica
 - Feedback: Evaluación de resultados
 - Corrección de los errores y reelaboración

IV.3.3- Metodología y Evaluación

La metodología del curso consiste en clases teóricas, grupos de elaboración y ejercitación práctica de los conceptos teóricos. Con relación a la evaluación final del mismo se prevee la presentación y posterior defensa de proyectos.

V- ACTUACION JUDICIAL DE LA ASESORIA GENERAL DE INCAPACES:

Hasta la confección del presente informe, diciembre de 2000, las causas judiciales en las que tuvo que intervenir esta Asesoría General de Incapaces fueron las siguientes: (Ver Anexo IX)

- **Resolución 08/00 de fecha 8 de febrero de 2000**

a) Fundamentación fáctica

Atento la preocupación manifestada por el tema de los niños rumanos en situación de calle, presuntas víctimas de maltrato y explotación por sus representantes legales, se ha solicitado la intervención de esta de esta Asesoría General de Incapaces.

b) Fundamentación Jurídica. Medidas adoptadas

Con anterioridad, ésta Asesoría General de Incapaces había enviado sendos oficios solicitando información más acabada sobre la situación de los niños rumanos. Los mismos no fueron debidamente respondidos y, en otros casos, lo fueron de manera deficiente.

Tal situación impidió que esta Asesoría General se expidiera sobre el tema planteado ante la falta de recursos para la misma (conf. oficios al Consejo Nacional del Menor y la Familia (N°23/99), al Señor Fiscal General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (N°2 1/99) y a la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (N° 22/99).

En consecuencia, por resolución N°8/00 se dispuso la reiteración del oficio a la Dirección General de Migraciones a fin de brindar información sobre la cantidad de personas de origen rumano ingresadas al país y sus edades durante la vigencia de la Resolución n°4632/94 (B.O del 27 /12/94), destacándose en su contestación si han ingresado en la calidad de refugiados, si han renovado la residencia y en qué situación se encuentran actualmente luego de vencido, en fecha 31 de diciembre de 1995, el plazo de "tratamiento especial".

- **Resolución N°09/00 de fecha 15 de febrero de 2000**

a) Fundamentación Fáctica

El Señor Defensor General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitió por oficio a esta Asesoría General de Incapaces copia certificada de actuaciones administrativas N°01/00 ca ratuladas: "Pizzio, Norberto: Leguizamón, Jacqueline y otros s/ presentación" a efectos de dictaminar en lo que correspondiere respecto de un grupo de niños cuyos expedientes judiciales tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia N°92 a cargo de la Dra. María Rosa Bossio ante el cual actúa la Defensoría Pública de Menores e Incapaces N°2.

b) Fundamentación Jurídica

Atento lo expresado se resolvió declararse incompetente para entender en las mismas y dispuso la remisión de las actuaciones administrativas al juzgado interviniente.

- **Resolución N° 28/00 de fecha 31 de marzo de 2000**

a) Fundamentación Fáctica

El Señor Defensor General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitió a esta Asesoría General de Incapaces las actuaciones administrativas N° 04/00 caratuladas "B., J. E (Asociación de Trabajadores Estudiantes Brazo Libertario)" s/ presentación" atento la denuncia contra las autoridades de la Escuela Normal Superior N° 2 en Leng uas Vivas "Mariano Acosta" de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por presuntas acciones de proscripción, persecución ideológica, discriminación y marginación hacia los estudiantes agrupados en la "Asociación de Trabajadores Estudiantes Brazo Libertario" que concurren a dicho establecimiento.

De las constancias de las actuaciones y de la entrevista mantenida el prosecretario administrativo con algunos de los supuestos damnificados surge que la cuestión era debatida ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 1 de Capital Federal, ante el cual actúa la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de la Capital Federal.

b) Fundamenatación Jurídica

Se dispuso declararse incompetente para intervenir y la devolución de las actuaciones al Señor Defensor General.

- **Resolución 50/00 de fecha 12 de junio de 2000**

a) Fundamentación fáctica

En fecha 30 de mayo de 2000, mediante oficio respectivo, la Señora Asesora Civil de Familia e Incapaces N° 2 de la ciudad d e Trelew, provincia de Chubut, solicitó información sobre qué Defensoría Pública de Menores e Incapaces había tomado intervención respecto de la búsqueda de paradero correspondiente a la joven E. M., de 18 años de edad, a raíz de una denuncia incoada por su guardadora, Señora M.N.E.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 18 de la ley N° 21 de la Ciudad de Buenos Aires, esta Asesoría General de Incapaces dispuso la citación de los guardadores de la joven en cuestión.

En fecha 8 de junio de 2000 comparecieron ante esta Asesoría General de Incapaces la guardadora a efectos de brindar las explicaciones que le fueron requeridas acerca de la desaparición de E.M.

De los dichos de la dicente surge que ésta habría realizado la pertinente denuncia ante la Comisaría N° 17 de la Ciudad Autóno m a de Buenos Aires.

b) Fundamentación Jurídica. Medidas adoptadas

En consecuencia, se ordenaron las siguientes medidas las que debieron ser llevadas a cabo mediante el libramiento de los oficios correspondientes, en los cuales se dejó constancia que sus contestaciones deberían ser remitidas a la Asesoría Civil de Familia e Incapaces interviniente, sita en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.

Los oficios fueron dirigidos: 1) al Señor Jefe de la División de Delitos contra Menores de la Policía Federal Argentina; 2) al Representante legal de la Organización No Gubernamental Red Solidaria (representante de Missing Children en la Argentina), ambos a fin de colaborar en la búsqueda de paradero de la joven E.M; 3) al Jefe de la Comisaría N° 17 a fin de, además de colaborar en la búsqueda de paradero en cuestión, amplíe la misma a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires mediante la comunicación interjurisdiccional pertinente.

Por último, mediante oficio pertinente, se remitió copia de las actuaciones labradas ante esta Asesoría General de Incapaces a la Asesoría interviniente como así también, se le hizo saber que hasta la fecha no había tomado intervención ninguna Defensoría Pública de Menores e Incapaces.

- **Resolución 52/00 de fecha 20 de junio de 2000**

a) Fundamentación fáctica

Se presenta ante esta Asesoría General de Incapaces los niños A.P. R; A.A.N.P.R y E.M.B.P.R de 15, 14 y 14 años de edad respectivamente, invocando la representación de otros tres hermanos mas pequeños, a fin de solicitar la intervención de este organismo para que adopte las medidas pertinentes a fin de no aplicarse el Decreto n° 430/00 del Poder Ejecutivo Nacional ya que, de lo contrario, se vería agravada la situación económica de su grupo familiar.

El decreto en cuestión dispone la reducción de retribuciones que afecta *"...al personal del sector público nacional comprendido en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156, incluyendo las entidades bancarias oficiales y las fuerzas armadas de seguridad y Policía Federal y el Poder Legislativo Nacional, con independencia del régimen laboral que resulta aplicable a dicho personal..."*.

Tal reducción salarial impuesta por el decreto mencionado alcanza al padre de los niños solicitantes ya que éste trabaja en relación de dependencia en el Consejo Nacional del Menor y la Familia.

b) Fundamentación Jurídica

Ante la solicitud en cuestión, esta Asesoría General de Incapaces resolvió que no correspondía la intervención de este organismo en la cuestión planteada ya que, y sin perjuicio del reconocimiento de los presentantes como sujetos de derecho (art. 39 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de jerarquía constitucional, art. 75 inciso 22), el interés legítimo afectado de manera directa se encontraba en cabeza del Señor G.A.P, padre de los jóvenes y niños solicitantes el que puede ejercer las acciones legales pertinentes ante los tribunales nacionales respectivos con el fin de atacar la eventual inconstitucionalidad del decreto 430/00 del P.E.N.

A mayor abundamiento y en su carácter de progenitor de personas menores de edad, tiene el derecho-deber de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna (conf. art. 265 del Código Civil).

- **Expediente N° 1592 caratulado: "H, B s/ arts. 38, 72 y 73 del Código Contravencional"**

a) Fundamentación fáctica

El Señor Fiscal Contravencional, a raíz de una denuncia incoada por vecinos, formula requerimiento de juicio en los términos del art. 44 del Código Contravencional contra Hilda Battistelli por incurrir en los ilícitos previstos en los

arts. 38 (hostigamiento y maltrato); 72 (ruidos molestos); y 73 (ensuciar bienes) del Código Contravencional, ley N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El mismo quedó radicado ante el Juzgado en lo Contravencional y Faltas n° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el marco del presente proceso se dispuso una audiencia a fin de citar a la presunta contraventora. La misma fue suspendida a pedido del Defensor Oficial en razón del estado mental de su defendida y la existencia del expediente N° 106.993/99, caratulado: "Battistelli, Hilda s/ art. 482 del Código Civil" en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12, con competencia exclusiva en asuntos de familia, a cargo de la Dra. Marcela Pérez Pardo.

Se fijó nueva fecha de audiencia pero el Defensor Oficial interviniente solicita la extinción de la acción por encontrarse su defendida comprendida dentro de las prescripciones de imputabilidad establecidas por el art. 34 inciso 1° del Código Penal en función del art. 141 del Código Civil.

Por su parte, el Fiscal manifiesta que de las constancias de autos no surge el estado de salud la Sra. Battistelli al momento del hecho.

En tal estado del proceso se suspende la audiencia a juicio y se dá intervención a esta Asesoría General de Incapaces.

b) Fundamento normativo

En primer lugar, éste organismo acepta su intervención ya que expresa que "... en tanto no hubiere creado el cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas, he de intervenir con mi actuación para representar a..." (dictámen de fecha 15 de mayo de 2000).

En consecuencia, se expide sobre el fondo de la cuestión planteada en los autos de marra.

Para tal fin se tiene a la vista venidos "ad effectum videndi" los autos mencionados del cual se desprende que la Defensoría Pública de Menores e Incapaces interviniente ha promovido proceso de incapacidad de la causante en los términos del art. 141 y 144 inciso 3° del Código Civil.

De los informes médicos confeccionados por el Cuerpo Médico Forense (en fecha 12/12/99 y 01/03/00) surge que la Sra. Battistelli *"... presenta cuadro compatible con un Síndrome delirante en remisión... incluido en el art. 144 del Código Civil" y que padece una "Afección que de acuerdo a las presentes constancias surge como iniciado en 1999..."*.

Tales diagnósticos, a criterio de esta Asesoría General de Incapaces, permitió encuadrar la situación en cuestión dentro de la doctrina que recepta el art. 473 del Código Civil que invalida los actos anteriores a la declaración de incapacidad si la causa de interdicción declarada por el juez existía públicamente en la época que los actos fueron ejecutados.

Asimismo se puso de manifiesto que, en relación el tema sobre "responsabilidad" de las personas en el ámbito penal es independiente a la capacidad de éstas en los términos que estipula el Código Civil.

Por lo tanto, y por aplicación de los arts. 900 y 921 del Código Civil, donde hay discernimiento hay responsabilidad y, a contrario sensu, si no hay discernimiento, como en el caso en estudio, no cabría responsabilidad alguna.

En consecuencia, se resuelve que, por aplicación supletoria del Código Penal en materia contravencional (art. 10 de la ley n° 10), la Sra. Battistelli no es

punible en los términos del art. 34 inciso 1° del Código Penal y por ende se solicita la declaración de inimputabilidad de la misma; poner en conocimiento de la curadora provisional a cargo de la Curaduría Oficial N°4 y remitir copia certificada al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°12.

- **Expediente N° 8198/00 caratulado "Winer, Walter L. S/ amparo art. 14 Código Contravencional"**

a) Fundamento Fáctico

El Señor Manuel W. Winer interpone formal acción de amparo contra el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Roberto Quirno (C.E.M.I.C) ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud a la orden, en forma unilateral por parte de la institución mencionada, de suspender el servicio de atención médica a la madre del solicitante con un cuadro de accidente cerebro vascular fundándose en exceso en el límite de servicios contratados.

b) Fundamento Jurídico

El Juzgado interviniente da vista de las actuaciones a esta Asesoría General de Incapaces la que, por intermedio de dictámen debidamente fundado, dispone que no es parte en tales actuados.

Ello es así por cuanto no surge de las constancias de autos que se hubiera declarado judicialmente la incapacidad de la madre del actor, Sra. Musih, o promovido denuncia en los términos del art. 152 bis del Código Civil, art. 482 del mismo cuerpo normativo o art. 626 del CPCCN que justificara la intervención de este órgano.

Asimismo se dejó sentado que la legitimación que otorga al Ministerio Público la ley de fondo para solicitar la declaración de demencia de aquellas personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o sus bienes (conf. art. 144 inc. 3° del Código Civil y art. 34 de la ley n°21 de la Ciudad de Buenos Aires), ha sido interpretada como una facultad y no un deber.

Además se tuvo en cuenta que, tal como surge de las constancias de autos, el actor, en su carácter de hijo de la Sra. Musih, con su pretensión ha amparado los intereses personalísimos de la causante.

VI- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEFINITIVA DE LA ASESORIA GENERAL DE INCAPACES

VI.1- Designación de Asesora General Adjunta

En fecha 22 de febrero de 2000, mediante resolución N°16/00 ha sido designada para ocupar el cargo de Asesor General Adjunta de esta Asesoría General de Incapaces la Dra. María de los Angeles Baliero de Burundarena atento la renuncia presentada y aceptada por resolución N°44/99 por parte de la Dra. Liliana Filgueira de Casares.

VI.2- Designación Asesor Tutelar ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso - Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Atento lo dispuesto por Resolución N°242 de fecha 4 de agosto de 2000, publicada en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 28 del mismo mes y año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prestó acuerdo al Dr. Gustavo Daniel Moreno para ocupar el cargo de Asesor Tutelar

ante los Juzgados de Primera Instancia ante el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

VI.3- Estructura Definitiva

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante resolución N° 320/2000 aprobó la estructura definitiva del Ministerio Público Tutelar. (Ver Anexo X)

En consecuencia, la estructura definitiva de esta Asesoría General Tutelar (de Incapaces) es la siguiente:

- Un (1) Asesor General Tutelar
- Dos (2) Asesores Generales Adjuntos. Uno para incapaces y otro para menores de edad
- Un (1) Secretario Letrado
- Tres (3) Prosecretarios Letrados
- Un (1) Prosecretario Administrativo
- Tres (3) Relatores
- Un (1) Oficial
- Tres (3) Escribientes
- Un (1) Auxiliar
- Cuatro (4) Auxiliares de Servicio

➤ Unidad Asesoría General Tutelar:

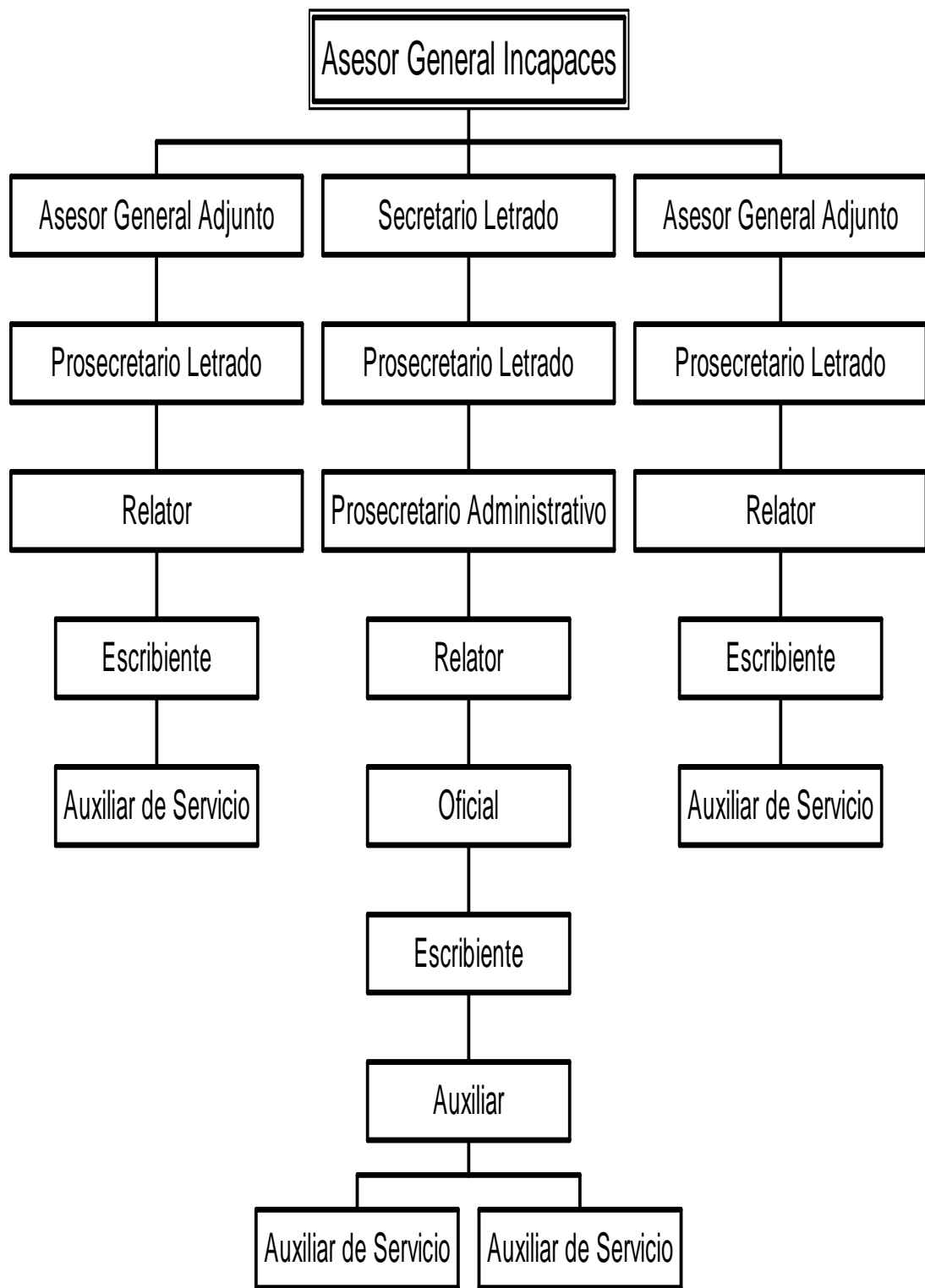
Un (1) Asesor General Tutelar; un (1) Secretario Letrado; un (1) Prosecretario Letrado; un (1) Prosecretario Administrativo; un (1) Relator, un (1) Oficial; un (1) Escribiente; un (1) Auxiliar y dos (2) Auxiliares de Servicio.

➤ Unidad Asesoría General Adjunta:

Un (1) Asesor General Adjunto; un (1) Prosecretario Letrado; un (1) Relator; un (1) Escribiente y un (1) Auxiliar de Servicio.

ANEXO

Asesoría General de Incapaces



ANEXO I: Informe Anual de la Asesoría Tutelar en lo Contencioso- Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL FUERO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

La Convención Nacional Constituyente de 1994 reformó el texto de la Constitución de la Nación Argentina (Ley nacional 24.430; sancionada el 15/12/94, promulgada el 3/1/95, publicada el 10/1/95. B.O.N.); estableciendo en el art. 129 que la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción.

El segundo párrafo del art. 8 de la Ley nacional 24.588 (Garantía de los Intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, B.O.N. 30/11/95) dispuso que la Ciudad de Buenos Aires tiene facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contenciosoadministrativa y tributaria locales.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires refiere al fuero Contencioso Administrativo y Tributario, como al Código en materia Contencioso Administrativa y Tributaria en la cláusula transitoria décimosegunda (puntos 1.a. y 2.).

La Ley N°7 (y sus modificatorias) organizó el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo que el fuero Contencioso Administrativo y Tributario se integra con la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, compuesta por seis (6) jueces y juezas, funcionando dividida en dos (2) salas de tres (3) jueces y juezas cada una. Se señala que es un tribunal de Alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces y juezas en lo Contencioso Administrativo y Tributario (art. 37).

Por su parte, el art. 48 de la Ley N°7 establece que la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario se integra con quince (15) juzgados que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Déjase aclarado que únicamente se llamó a Concurso para cubrir doce (12) cargos de jueces y juezas para los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mediante Ley N°189 (B.O.C.B.A. N°722 - 28/6/99) la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió con fecha 12 de mayo de 1999 (Resolución N°31/99) la integración del Ministerio Público ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires; lo que con posterioridad fue modificado por la Ley N°316 (B.O.C.B.A N°868 - 27/1 /2000) que modificó la Ley N°21 (Ley Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires - B.O.C.B.A. N°450 - 20/5/98).

Así, el art. 6 de la Ley N°316 incorporó el art. 34 ter a la Ley N°21, que dispuso que: *“El Ministerio Público tutelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires está integrado por dos (2) asesoras o asesores tutelares, que pueden actuar indistintamente en primera y segunda instancia”*.

La Resolución N°337/00 del Consejo de la Magistratura

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (B.O.C.B.A. N°1038 - 29/9/00), puso en funcionamiento los Tribunales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 1).

De acuerdo a los arts. 2 y 3 de la mencionada Resolución, y en virtud del art. 6 de la Resolución N°405 (B.O .C.B.A. N°1057 - 27/10/00), se declaró feria judicial para la recepción de todas las causas entre los días 2 de octubre y 14 de noviembre de 2000 inclusive, con excepción de los procesos de amparo, cuyo trámite pudo iniciarse a partir del día 10 de octubre de 2000.

2. INTEGRACIÓN DE LA ASESORÍA TUTELAR ANTE EL FUERO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO.

Tal como se señalara más arriba, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, crea dos Asesorías Tutelares que actúan indistintamente en primera y segunda instancia (art. 34 ter de la Ley N°21).

De las dos Asesorías únicamente se encuentra en funcionamiento una sola, con una exigua plantilla de personal establecida mediante Anexo I de la Resolución N°31/99 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fija para la Unidad Asesoría Tutelar ante la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria el siguiente personal:

- 1 Asesor Tutelar.
- 1 Secretario de Primera Instancia.
- 1 Prosecretario Administrativo.
- 1 Escribiente.
- 1 Auxiliar.
- 1 Ordenanza.

El suscripto fue designado como Asesor Tutelar, en virtud del Concurso N° 1/99 aprobado mediante Resolución N° 133/2000 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acuerdo otorgado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 19 de la Resolución N°242, del 4/8/2000, B.O.C.B.A. 28/8/2000); y juramento prestado ante el Asesor General de Incapaces, Dr. Roberto Cabiche, el 28 de setiembre de 2000.

El cargo de **Secretario de la Asesoría Tutelar** ha sido cubierto por el **Dr. Juan Carlos Toselli**, en razón del Concurso N°4/99; siendo designado por Resolución N°343/2000 (27/9/2000) de l Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mediante Resolución N°352/2000 el Consejo de la Magistratura designó al personal de esta Asesoría Tutelar a partir del 2 de octubre de 2000, según el siguiente detalle:

- **Prosecretaria Administrativa:** **Ángeles Casares Filgueira.**

- **Escribiente:** Norma Beatriz Sás.
- **Auxiliar:** Cecilia María Gatzke.
- **Auxiliar de Servicio:** Aída Yolanda Noriega.

3. LA ASESORÍA TUTELAR Y LA FUNCIONALIDAD DE LA ACTUACIÓN FRENTE A AMBAS INSTANCIAS. NECESIDAD DE MODIFICACIONES.

El art. 34 ter de la Ley N°21 (t.o. Ley N°316) dispone la creación de dos Asesoras/es Tutelares (recordemos que solamente se encuentra en funcionamiento una sola Asesoría) *que pueden actuar indistintamente en primera y segunda instancia, sin determinar expresamente si las/os Asesoras/es serán de primera instancia o de segunda instancia.*

Esta actuación indistinta en ambas instancias por parte de un mismo Asesor/a, y la falta de creación específica de los cargos de Asesor/a Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de Asesor/a Tutelar ante la Cámara del mismo fuero, **representa una irrazonabilidad en la actuación**, ya que el mismo Asesor/a que apele una resolución de un Juez/a de Primera Instancia, será quien luego analizará el mantenimiento del recurso ante el Tribunal de Alzada, *descartándose en este caso el mantenimiento, en tanto aparecería como poco viable y entendible que la misma persona actuando como Asesor de Cámara desista del planteo que él mismo formulara como Asesor de Primera Instancia.*

A ello se suma, que si bien la Ley N°21 (t.o. Ley N° 316) no aclaró la jerarquía del cargo (de Primera Instancia o de Cámara), el Consejo de la Magistratura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires consideró que se trata de un Asesor Tutelar de Primera Instancia. Así, y dado que la remuneración es igual a la de un juez/a de primera instancia (art. 11 inc. c) Ley 21), resulta evidente que se origina una desproporción remunerativa por la doble labor ante dos instancias distintas.

Y tal desproporción no solamente alcanza al Asesor Tutelar, sino también al Secretario y Prosecretaria Administrativa, cuyos equivalentes remunerativos en segunda instancia son mayores.

Por ende, entiendo que la situación puede aparecer como violatoria del art. 14 bis de la Constitución Nacional, que impone que las condiciones de trabajo impliquen **“retribución justa”** e **“igual**

remuneración por igual tarea”, en tanto no existirá relación entre la remuneración, la actuación en doble instancia ha desarrollarse, y la puesta a disposición de la capacidad de trabajo del titular y de los funcionarios de la Asesoría.

Recordemos la doctrina sentada en el caso “Bessolo Leopoldo A. c/Osa Pedro” -del año 1967-, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la Constitución otorga a quien presta servicios **el derecho a una retribución justa que contemple la índole, magnitud y dificultad de la tarea realizada, obligando a mantener una relación razonable entre la retribución que se fija y la tarea efectivamente cumplida**³.

A su vez, el art. 7 inc. a) del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley nacional 23.313, de jerarquía constitucional, art. 75 inc. 22° C.N.) garantiza una remuneración que proporcione **un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie**.

Por otra parte, la discriminación se acentúa si se compara a la Asesoría Tutelar con las demás ramas del Ministerio Público dentro del mismo fuero. Nótese que la propia Ley N° 21, en sus arts. 22 bis y 23 bis, establece que el Ministerio Público Fiscal ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario está integrado por un Fiscal de Cámara (art. 22 bis, 1er. párr.) y tres Fiscales de Primera Instancia (art. 23 bis, 1er. párr.); en idéntico sentido, en los arts. 26 bis y 27 bis, se dispone que el Ministerio Público de la Defensa ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, está integrado por un Defensor de Cámara (art. 26 bis, 1er. párr.) y tres Defensores de Primera Instancia (art. 27 bis).

A mayor abundamiento, cabe destacar que la Asesoría Tutelar -ante ambas instancias- actuará con una exigua plantilla de personal, menor a la que tienen las Fiscalías de Primera Instancia (ver Anexo I de la Resolución N° 31/99 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y proporcionalmente reducida, si se tiene en cuenta la plantilla creada en la instancia superior (ver Resolución N° 320/2000 C MCABA.).

Por ende, la creación de Asesores/as que actúen indistintamente en ambas instancias resulta inconveniente, en tanto supone un trato funcional diverso para el integrante y los funcionarios del Ministerio Público Tutelar del fuero, recargando sus tareas sin una adecuada plantilla de personal, y en comparación a los integrantes y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, que actúan dentro del mismo fuero. Si a ello sumamos, que dicha desigualdad funcional no supone una mejora remunerativa, aparece como evidente la irrazonabilidad funcional y patrimonial.

Por lo tanto, considero que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá modificar la Ley N° 21 (t.o. leyes N° 88 y N° 316), estableciendo que los cargos de Asesores/es creados en el art. 34 ter corresponden a la Primera Instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, debiéndose crear además el cargo de Asesor de Cámara del mismo fuero.

³ BIDART CAMPOS, Germán; “Manuel de Derecho Constitucional Argentino”, pág. 357. Ed. Ediar, Buenos Aires, 1983.

Elo sin perjuicio de dotar a la Asesoría Tutelar de mayor personal, **siendo necesaria la incorporación a la plantilla de un cargo de Oficial y otro de Asistente Social (equiparado remunerativamente al cargo de Relator)**, lo que expresamente dejo peticionado.

La integración propuesta supondrá además de una justa equiparación, una mayor capacidad de trabajo de la Asesoría para la actuación judicial -en el caso del Oficial-, como también una posibilidad de actuación -en el caso de la Asistente Social- en tareas de recolección, actualización y articulación de recursos sociales brindados por las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la colaboración extrajudicial que pudiera brindarse desde el Ministerio Público Tutelar a los Servicios Sociales de los Hospitales Públicos y Equipos de Orientación Escolar, en estricta coordinación con las Defensorías Zonales previstas en la Ley N° 114.

4. LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA ASESORÍA TUTELAR.

A la fecha de la puesta en funcionamiento del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se adjudicó a la Asesoría Tutelar un reducido lugar físico en el cuarto piso del edificio de Avenida de Mayo N° 761 Piso 4° de esta Ciudad, que es compartido con la Defensoría del mismo fuero, a cargo del Dr. Fernando Lodeiro Martínez.

El personal de la Asesoría Tutelar como el personal de la Defensoría ocupan un mismo sector abierto, dividiéndose la ubicación por una columna. Existen solamente dos despachos cerrados contiguos que son ocupados por el señor Defensor y por el suscripto, mientras que los Secretarios de la Asesoría Tutelar y de la Defensoría carecen de despacho propio, habiendo sido asignado para ellos, reducidos boxes abiertos, al igual que para ambas Prosecretarías Administrativas. Destaco que todos los Secretarios de Juzgados y del Ministerio Público Fiscal tienen despacho propio cerrado.

Se podrá advertir que no existe privacidad para el personal, como tampoco para las personas que pudieran concurrir a la Asesoría Tutelar por expresa citación (art. 18 Ley N° 21), o que pretendan la intervención judicial o extrajudicial del Ministerio Público, o que requieran asesoramiento -funciones que prevé específicamente el art. 34 de la Ley N° 21-. Tales personas deberán relatar su problemática en un ámbito no adecuado para ello.

Destácase que con fecha 2 de noviembre de 2000, se envió al señor Director de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr. Norberto Urfeig, una nota conjunta con el señor Defensor en lo Contencioso Administrativo y Tributario a los fines de la construcción de dos despachos cerrados, destinados a los señores Secretarios de la Defensoría y de la Asesoría Tutelar, acompañándose un proyecto de modificación sobre el plano del cuarto piso del edificio de Avda. de Mayo N° 761.

Es preciso destacar además que todo el personal de la Asesoría Tutelar cuenta únicamente con baños públicos (de hombres y de mujeres), que se encuentran destinados también al personal de la Sala I de la Cámara, de la Fiscalía ante la Cámara, de la Fiscalía de Primera Ins-

tancia N° 1, de la Defensoría, y al público asisten te al cuarto piso. No existe cocina, y no se cuenta ni con una pequeña heladera, como tampoco con un lugar adecuado para la limpieza de vasos, tazas, platos y demás utensilios, que no sea el baño público, situación bastante desagradable y que expone al personal a eventuales problemas de higiene.

En cuanto a la incorporación de mobiliario y demás elementos de trabajo, la prestación es muy satisfactoria por parte del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y de acuerdo a lo que se requiriera desde esta Asesoría Tutelar para la puesta en funcionamiento de la misma, aún cuando no se cuenta con las publicaciones jurídicas diarias (LA LEY, EL DERECHO, JURISPRUDENCIA ARGENTINA) que permitan prestar un mejor servicio de justicia -requeridas a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria, por Oficio N° 6/00 de fecha 3 de octubre de 2000-, con excepción de los Boletines Oficiales de Ciudad, y de Nación que son diariamente remitidos.

5. AUTONOMÍA JURIDICCIONAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: La competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario frente a la competencia transitoria de la Justicia Nacional en lo Civil.

El art. 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “***...Son causas contencioso administrativas ...todas aquellas en las que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público.***”.

De ello se desprende en primer lugar una **competencia en razón de la persona**, en tanto todas aquellas actuaciones judiciales en las que actúe como actora o demandada una **autoridad administrativa** deben tramitar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario; entendiéndose como autoridad administrativa a la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires en ejercicio de la función administrativa y los entes público son estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.

Se suma a lo expuesto, una aclaración en cuanto a la amplitud de la **competencia en razón de la materia**, ya que **cualquiera que sea el fundamento u origen** de la actuación de la autoridad administrativa, **tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado**, la competencia debe atribuirse a la nueva Justicia de la Ciudad, siendo ello además de **orden público**.

Pero aún frente a esta claridad normativa en materia de competencia, se han comenzado a vislumbrar llamativas interpretaciones efectuadas por la Justicia Nacional en lo Civil, que “prima facie” aparecerían como violatorias de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad.

Como es sabido, la Justicia Nacional en lo Civil ha sido competente para conocer en las causas en que era parte la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de las de naturaleza penal (conf. art. 43 inc. a) Decreto-Ley 1285/58); y ha mantenido tal competencia **-de manera transitoria-** hasta el efectivo funcionamiento de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así fue reconocido por el propio Ministerio Público Fiscal ante la Justicia Nacional en lo Civil en numerosos dictámenes, como en propios fallos de jueces de primera instancia en lo civil.

Sin embargo, recientemente han aparecido fallos que violan dicha competencia, y por ende la autonomía jurisdiccional de la Ciudad.

Entre ellos, y **en relación a la competencia en razón de la materia**, se puede señalar el dictado por la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con fecha 23 de agosto de 2000, en autos "S.,N. c/H.S.D.S. y Otros s/daños y perjuicios", donde se dice: *"...aún cuando pueda aceptarse, en el ámbito doctrinario, la determinación por el sujeto de aquello que el legislador porteño entiende como jurisdicción "contencioso-administrativa", lo que no puede admitirse es la aplicación efectiva de tales normas, en lo que importen contradecir los expresos términos y límites impuestos por la ley 24.588, ya que ello llevaría a una invasión indebida de la esfera propia de competencia de este tribunal, por la vía de extralimitar la jurisdicción contenciosa administrativa local, a casos que como el presente son de total naturaleza civil"*.

En dicho caso, se discutía una cuestión de responsabilidad profesional médica de un dependiente de un hospital público (G.C.B.A.).

Con esta doctrina judicial -aplicable a todos los daños y perjuicios incoados en contra de una autoridad administrativa-, que aparentemente comenzaría a tener algún consenso en otras salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, no sólo se contradice una norma de orden público como lo es el art. 2 CCAT., sino que se conculca la autonomía jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evitando la aplicación de derecho de fondo (civil) por parte de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, pretendiéndosela reducir a una justicia recaudadora en materia fiscal.

En relación a los expedientes aún en trámite ante la Justicia Nacional en lo Civil y que deberían pasar a tramitar ante este fuero, se ha resuelto que: *"...el actor, al presentar la demanda, se somete a la competencia del Juez, perdiendo el derecho de oponer la incompetencia en lo sucesivo, salvo el caso de reconvenición. Ahora bien, el demandado -por su parte- puede oponer la excepción de incompetencia sólo en función de las normas jurídicas vigentes al ser notificado del traslado de la demanda, y de la circunstancias fácticas ocurridas hasta ese momento. ...En tal inteligencia, y dado que a esa fecha los tribunales contenciosoadministrativos de la Ciudad todavía no habían sido constituidos, corresponde declarar que el Juez "a-quo" es competente para conocer..."* (CNCiv., Sala D, octubre 13-2000; en autos I.A.T.A.S.A. c/M.C.B.A. s/ordinario", expte. 71.718/97; con dictamen del Fiscal de Cámara en idéntico sentido, de fecha 10/10/2000, dictamen N°48.671).

De esta manera, únicamente traspasarían a este fuero, desde la Justicia Nacional en lo Civil, los expedientes en trámite en los cuales no se hubiera trabado la litis; es decir, prácticamente ninguno.

Como es sabido, la atribución jurisdiccional es inherente a la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en

cuanto a su facultad propia de legislación y jurisdicción reconocida en el art. 129 de la Constitución Nacional, por lo que corresponde que los magistrados e integrantes del Ministerio Público de este fuero, agotemos en derecho todas las instancias judiciales para preservar tal autonomía (art. 6 Constitución de la Ciudad), frente al cercenamiento de competencia que se pretendería efectuar desde la Justicia Nacional en lo Civil.

6. LA ACTUACIÓN DESARROLLADA POR LA ASESORÍA TUTELAR ANTE LA JUSTICIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO.

A) ACTIVIDAD JUDICIAL.

Como ya se dijo anteriormente el fuero contencioso y administrativo se ha encontrado de feria hasta el día 14 de noviembre de 2000, a excepción de los expedientes de amparo, los cuales tramitan desde el día 10 de octubre de 2000. Formulada tal aclaración en relación al ***reducido tiempo de actuación***, describiré la actuación judicial de la Asesoría Tutelar, limitada a tres expedientes concretos:

A.1. “ASESORÍA TUTELAR JUSTICIA CONTENCIOSO CABA c/G.C.B.A. s/amparo (art. 14 CCABA), expte. 24/2000”: Mediante Oficio N° 803/00 de fecha 18 de octubre de 2000 la señora Defensora General Adjunta del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Graciela Elena Christe, remitió a esta Asesoría Tutelar la presentación efectuada por la señorita I.F.G. “...relacionada con su representación, la que solicita que sea ejercida en forma ‘independiente de sus padres’, tendiente a revisar la medida expulsiva que se le aplicó y respecto de la que ha sido agotada la vía ad-

ministrativa...” (conf. Resolución del señor Defensor General, Dr. Víctor Hortel, de fecha 18/10/2000).

Que la medida expulsiva consistió en la separación de la adolescente de una Escuela Normal Superior, adoptada por disposición del Rector de la Escuela, y confirmada administrativamente mediante Resolución del Secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mantuve una entrevista personal con la joven a fin de escuchar personal y directamente su reclamo, en virtud del art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; asimismo me reuní con el padre de la adolescente y su letrada, y con su madre, a fin de tomar conocimiento de la situación y brindar el asesoramiento que establece el art. 34 inc. 5° de la Ley 21.

De tales entrevistas, surgió la intención por parte de la joven de promover una acción autónoma tendiente a su reincorporación a la Escuela Normal Superior, basada en la persecución política e ideológica que sufriera como integrante de la agrupación de estudiantes.

Que la adolescente requirió una acción independiente con asistencia letrada propia, distinta de la acción incoada por su padre en autos “G., C.A. y Otro c/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/amparo” (expte. 24.508/2000), radicados ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 94 de Capital Federal.

Habiéndose analizado las entrevistas personales mantenidas, y demás elementos arrimados y recopilados, resultó que a la adolescente mencionada no se la hubo **escuchado directamente** en sede administrativa como tampoco en la sede judicial civil a pesar de tratarse de una persona menor adulta con discernimiento suficiente (art. 921 Código Civil) y ser una obligación oír su reclamo (art. 12 Convención sobre los Derechos del Niño); habiéndose además vulnerado sus derechos a través de una resolución administrativa, no sólo en cuanto a su derecho a educarse (art. 27 de la Ley 114) y a su derecho de defensa y debido proceso (art. 18 C.N.), sino en la estricta relación causal que existiría entre la separación del establecimiento educativo y su militancia en una agrupación político-estudiantil, que implicaría un trato discriminatorio a través del acto administrativo.

A ello se suma que la cuestión en debate se trata de una causa encuadrada dentro de las previsiones del art. 2° del CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, y que la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra en funcionamiento para los expedientes de amparo desde el día 10 de octubre de 2000 (conf. art. 3 Res. N° 337/00 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, B.O.C.B.A. N° 1038 del 29/9/00).

Por ello, dado que los representantes necesarios no articularon la cuestión de competencia ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°94 de Capital Federal, y que dicha cuestión es inherente a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a su facultad propia de legislación y jurisdicción reconocida en el art. 129 de la Constitución Nacional, correspondía que el Ministerio Público Tutelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires agotase en derecho la instancia judicial para preservar tal autonomía (art. 6 Constitución de la Ciudad) planteando la acción pertinente a fin de que la titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°94 de esta Ciudad se inhiba de continuar entendiendo.

A tales fines, se iniciaron con fecha 27 de octubre de 2000 los autos *“ASESORÍA TUTELAR JUSTICIA CONTENCIOSO CABA c/G.C.B.A. s/amparo (art. 14 CCABA), expte. 24/2000”*, ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 Secretaría N° 1, que actualmente se encuentran a resolver.

Con ello, se intenta no sólo resguardar derechos expresamente reconocidos a la joven, sino que así se permitirá a la adolescente formular su reclamo con patrocinio jurídico propio a través de las Defensoría Zonales (conf. art. 70 inc. “g” Ley 114), afirmando la autonomía jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A.2. “S., M. L. c/G.C.B.A. s/amparo (art. 14 CCABA), expte. N° 26/2000”: Tales actuaciones tramitan ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11 Secretaría N° 21, tratándose de un amparo por mora en la administración (G.C.B.A. - Secretaría de Promoción Social) en relación a una petición incoada en beneficio de una persona interdicta. Si bien el “amparo por mora” no se encuentra previsto en la legislación local, tanto el Juzgado como el Ministerio Público interviniente (Fiscalía N° 1 y Asesoría Tutelar) dieron viabilidad a la petición, encontrándose aún en pleno trámite.

A.3. “S.T. c/G.C.B.A. s/amparo (art. 14 CCABA), expte. N° 85/2000”. En tales actuaciones, que tramitan ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7 Secretaría N° 14, se presentó la parte actora, interponiendo recurso de amparo en los términos del art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”, por violación al derecho de salud y a la

integridad física en grave perjuicio al derecho a la vida, materializado en la negativa del Hospital a realizarle una inducción al parto o aborto terapéutico por padecer anencefalia (falta de desarrollo de la masa encefálica) la persona por nacer.

La Asesoría Tutelar como la Fiscalía N° 1 sostuvieron la competencia el fuero en lo contencioso administrativo y tributario para entender en las presentes actuaciones, en virtud de lo normado en el art. 2° del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y tratándose de un proceso de amparo -vía idónea para la efectiva protección del derecho a la vida, a la salud y a la integridad física- dirigido contra una autoridad administrativa del G.C.B.A. (art. 1° CCAT.).

Asimismo, esta Asesoría Tutelar ha asumido la representación autónoma de la persona por nacer, en los términos del art. 59 Código Civil y art. 34 incs. 2° y 4° Ley 21, adelantado su opinión en contra de la petición incoada, en mérito a que en nuestro derecho se reconoce la existencia de la personalidad humana desde la concepción. Así, lo establece el art. 2° de la Ley 23.849 (aprobatoria de la Convención sobre Derechos del Niño, de jerarquía constitucional, art. 75 inc. 22° C.N.); como también los arts. 63 y 70 del Código Civil. Por ende, la acción intentada conculcaría el derecho a la vida de la persona por nacer.

La señora Jueza dispuso declararse incompetente remitiendo las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia, ante lo cual tanto la Fiscalía N° 1 y esta Asesoría hemos apelado, encontrándose el expediente pendiente de resolución en la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero.

B) ACTUACIÓN EXTRAJUDICIAL.

Siguiendo la premisa sentada en el art. 59 del Código Civil, reafirmada en el art. 34 inc. 2° de la Ley N° 21, como en los criterios generales de actuación brindados por el señor Asesor General de Incapaces, Dr. Roberto Cabiche, en su informe anual del año 1999⁴; esta Asesoría Tutelar ha actuado desarrollando tareas extrajudiciales, a saber:

B.1. Comunicación de sede oficial de la Asesoría

Tutelar: Se enviaron oficios comunicando la sede y teléfonos de la Asesoría Tutelar a mi cargo, a:

⁴ Informe Anual del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 1999; punto IX “LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN EXTRAJUDICIAL”, págs. 24 a 28, ed. Imprenta de la Ciudad, enero 2000.

- Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dra. Ana María CONDE.
- Defensor General de la Nación: Dr. Miguel Angel ROMERO.
- Procurador General de la Nación: Dr. Nicolás BECERRA.
- Defensor General ante la Cámara Nacional en lo Civil, Dr. Alejandro Cayetano MOLINA.
- Defensores/as Públic/osas de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, en lo Comercial, y del Trabajo.
- Defensoras Públicas de Menores e Incapaces ante los Juzgados Orales de Menores en lo Penal.
- Presidente de la Cámara Nacional en lo Civil: Dr. Alberto BUERES.
- Secretaría de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Secretaría de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Secretaría de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Responsable del Área de los Derechos del Niño de UNICEF Argentina: Sra. Irene KONTERLLNIK.
- Presidenta del Consejo Nacional del Menor y la Familia: Dra. María Perla Orseñigo.
- Directora General a cargo de la Dirección General de la Familia y el Menor: Sra. Sara Irma CANEPA.
- Coordinadora General de la Red de Defensorías para Niños, Niñas, y Adolescentes, Dra. Cecilia SOSA.
- Directora del Consejo Provincial del Menor: Sra. Irma Orfelía LIMA.
- Director de Salud Mental del Gobierno Autónomo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dr. Roberto LO VALVO.
- Director General de Atención de la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dr. Elías HURTADO HOYO.
- Director del Hospital Infante Juvenil Dra. Carolina Tobar García. Dr. Roberto YUNES.
- Centros de Gestión y Participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Sra. Alicia B. OLIVEIRA.
- Director General Instituto Interamericano del Niño. Lic. Alejandro BONASSO.
- Presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Dr. Atilio ALTERRINI.

- Jefa del Servicio Social del Patrocinio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires. Lic. Alicia HUSNI.
- Jefa del Servicio Social del Hospital Muñiz. Lic. Guillermina ARBELLO.
- Director de a.p.a. de a. (Asociación de Padres para Chicos con Autismo). Presidente Dr. Horacio Joffre Galibert.
- Director del Banco Nacional de Drogas Neoplásicas y del Programa Nacional de Control del Cáncer.

B.2. Requerimiento de implementación de la Ley N° 114; Mediante **Oficio N° 62/00** de fecha 10 de octubre de 2000 se le solicitó información en los términos del art. 18 de la Ley 21 al señor Secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Raúl Fernández, en cuanto a las medidas llevadas, tendientes a la implementación de la Ley N° 114 (PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES).

Dicho oficio no fue contestado, aún cuando con fecha 20 de octubre de 2000 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto N° 1.760 de fecha 13 de octubre de 2000, por el cual se designó a la Prof. María E. Naddeo y a la Sra. Dora J. Martina como Presidenta y Vicepresidenta respectivamente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires; transfiriéndose al Consejo el Programas de Defensorías dependientes de la Secretaría de Promoción Social.

B.3. Requerimiento de rampas y baños para personas discapacitadas para el edificio de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario: Mediante **Oficio N° 73/00** se requirió al señor Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación y adecuación de la estructura del edificio de Avda. de Mayo N° 761 (sede la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) a las disposiciones de orden público que consagran y reglamentan los derechos que poseen las personas con necesidades especiales, y que garantizan el respeto a su dignidad e igualdad de oportunidades.

En tal sentido, se destacó la ausencia de rampas tanto en los accesos al edificio como en su interior, la falta de instalaciones sanitarias y la dificultad de uso de los ascensores que, de un modo cierto, dificultan o liminarmente impiden, además, su adecuado acceso al servicio de justicia.

Con fecha 19 de octubre de 2000 el señor Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicó a esta Asesoría Tutelar que había instruido con fecha 18 de octubre de 2000 a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial, para que analizara las posibles soluciones y medios para suplir las falencias edilicias señaladas en función de las personas con necesidades especiales que eventualmente concurren al edificio, lo que podría implicar un impedimento del acceso a la justicia.

Hasta el presente, no se ha advertido el inicio de tareas de construcción de rampas, baños, u otro tipo de instalaciones destinados a personas con necesidades especiales.

B.4. Requerimiento sobre programas sociales dependientes de la Secretaría de Promoción Social del G.C.B.A.: Mediante **Oficio N° 76/00** de fecha 13 de octubre de 2000 se requirió al señor Secretario de Promoción Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Justo Daniel FIGUEROA información acerca de los programas sociales que corresponden a la Secretaría a su cargo, y que se encuentren actualmente a disposición de la ciudadanía.

Dicha información no ha sido remitida hasta la fecha, aún cuando el oficio referenciado fue recibido por Promoción Social el 17 de octubre de 2000.

B.5. Requerimiento acerca de eventuales deficiencias materiales denunciadas por la Cámara Nacional en lo Civil respecto del Hospital Braulio Moyano: Erronéamente, la Dirección de Salud Mental (G.C.B.A.) remitió a esta Asesoría Tutelar actuaciones administrativas, de las cuales surgía deficiencias materiales en el Hospital Braulio Moyano denunciadas por la Sala G de la Cámara Nacional en lo Civil, tales como: falta de personal, falta de terminación de red cloacal y de agua, deficiente suministro de alimentación, y reducido número de camas para las pacientes.

Habiendo tomado conocimiento de ello, mediante **Oficio N° 86/00** de fecha 24 de octubre de 2000, se solicitó por intermedio del señor Director de Salud Mental (G.C.B.A.) Dr. Roberto Lo Valvo, que la autoridad de aplicación que corresponde dentro del Poder Ejecutivo, arbitre las medidas necesarias para que las áreas correspondientes a Salud y Hacienda (G.C.B.A.) tomen la debida intervención para subsanar las deficiencias materia-

les informadas por los señores Jueces de Cámara en lo Civil. Dicho oficio no fue contestado hasta el día de hoy.

Asimismo, a través de **Oficio N° 87/00** se puso en conocimiento del señor Asesor General de Incapaces, Dr. Roberto Cabiche, en los términos del art. 34 inc. 9° de la Ley 21, las eventuales irregularidades en la prestación del servicio de salud mencionadas.

B.6. Requerimiento sobre información ambiental acerca de los areneros de las plazas de la Ciudad de Buenos Aires: Mediante **Oficio N° 88/00** de fecha 24 de octubre de 2000, se solicitó al señor Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Regional (G.C.B.A.) Sr. Norberto Luis La Porta, que informara en los términos del art. 26 in fine de la Constitución de la Ciudad, art. 1 de la Ley 303 (LEY DE INFORMACIÓN AMBIENTAL), y art. 18 de la Ley 21 (LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO), las medidas tendientes a garantizar el efectivo goce de los derechos de los niños y niñas a un ambiente sano y a la salud integral, en los areneros y juegos de las plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se fundamentó el pedido en las denuncias periodísticas que tomaron estado público, en medios televisivos y gráficos, por las cuales la mayoría de los areneros estarían contaminados por una bacteria llamada “Escherichia Coli”, que provoca diarrea y trastornos gastrointestinales. Se habría detectado, asimismo, el contagio de Toxocariasis, enfermedad causada por un parásito que tienen los animales.

Esta situación de infección habría sido confirmada a medios periodísticos por el propio Subsecretario de Medio Ambiente, Eduardo Ricciuti (ver Clarín, domingo 8 de octubre de 2000).

Dicho oficio, recibido con fecha 24 de octubre de 2000 (Registro N°25/2), aún no ha sido contestado.

B.7. Requerimiento sobre censo de embriones congelados en la Ciudad de Buenos Aires: Habiendo tomado estado público la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “I”, en autos “R., R.D. s/medidas precautorias” del 3 de diciembre de 1999 (E.D. 185-412), mediante la cual se habría ordenado a la Secretaría de Salud (G.C.B.A.) un censo de embriones no implantados y ovocitos pronucleados existentes y conservados artificialmente por instituciones públicas y privadas de esta Ciudad;

esta Asesoría Tutelar requirió a través de **Oficio N° 99/00** de fecha 30 de octubre de 2000, al señor Secretario, Dr. Marcos Buchbinder información al respecto, ya que aún cuando la cuestión judicial se encuentra bajo la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil, la realización de un censo resulta ser una cuestión de carácter eminentemente administrativo y de evidente interés para el Ministerio Público Tutelar de este fuero.

Dicho oficio, recibido el 30 de octubre de 2000, aún no ha sido contestado

B.8. Visita al Hospital Materno Infantil Sardá y al Hospital General de Agudos “Cosme Argerich” por eventual incumplimiento de Ley Nacional 23.413:

Con fecha 8 de noviembre de 2000 me constituí personalmente en el Hospital Materno Infantil Sardá y en el Hospital General de Agudos “Cosme Argerich”, a fin de mantener una entrevista con las señoras Jefas de Obstetricia y demás autoridades de tales nosocomios. Ello, a raíz de la problemática que hubo tomado estado público a partir de la denuncia periodística efectuada en el programa televisivo “Telenoche Investiga” el día 1 de noviembre de 2000, relativa al incumplimiento en dichos hospitales de la prueba obligatoria de rastreo para la detección precoz de la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, y la fibrosis quística en niños recién nacidos, establecida como obligatoria en todas las maternidades y establecimientos asistenciales en virtud de la Ley nacional N° 23.413 (t.o. Leyes 23.874 y 24.438) reglamentada por el Decreto P.E.N. N° 1316/94.

De tales entrevistas pude constatar que en ambos establecimientos no se efectuaban las pruebas de control mencionadas, delegándoseles a los progenitores de los recién nacidos, la obtención de la prueba de rastreo, derivándolos a otros establecimientos asistenciales públicos (Hospital Pedro Elizalde, Hospital Garrahan) o privados (Fundación Endocrinológica Infantil).

En el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, el señor Director del Hospital, Dr. Argento, me informó que tal situación cesaría de inmediato en razón de que el señor Secretario de Salud, Dr. Marcos Buchbinder había ordenado mediante memorandum de fecha 6 de noviembre de 2000 (fecha posterior al programa televisivo), que los establecimientos que no tienen laboratorios para efectuar las pruebas de rastreo, tendrían la obligación de to-

mar las muestras de sangre y enviarlas a los establecimientos públicos estatales que contaban con tal infraestructura.

No dejo de advertir que con anterioridad a la denuncia periodística, habría existido un eventual incumplimiento de la Ley 23.413 que impone la realización de las pruebas de rastreo **en todas las maternidades y establecimientos asistenciales**, lo que implica a su vez un incumplimiento en la política pública de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 3 inc. "I", art. 5, y art. 8 de la Ley N° 153), en especial tratándose de obligaciones estatales asumidas respecto de niños recién nacidos (art. 24 inc. b) y f) de la Ley N° 114).

B.9. Visitas a Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, Hospital Infante Juvenil Dra. Carolina Tobar García, Hospital Borda, y Hospital Braulio Moyano.

En cumplimiento a lo normado en el art. 34 inc. 9° de la Ley N° 21, se ha inspeccionado los establecimientos de internación psiquiátrica dependientes de la Secretaría de Salud del G.C.B.A. (Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, Hospital Infante Juvenil Dra. Carolina Tobar García, Hospital Borda, y Hospital Braulio Moyano), en los cuales se ha notado **una excelente predisposición por parte de los profesionales intervinientes**, aún cuando **existen muchas necesidades materiales -de eminente carácter administrativo- para poder brindar un adecuado servicio de salud**, de acuerdo a los derechos expresamente reconocidos en las Leyes 153, 448, y 114 en su caso, y que se corresponden **con obligaciones a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**

Al respecto, me remito expresamente a las actas que fueran confeccionadas en oportunidad de las inspecciones realizadas -y que integran este informe como anexo-, recomendando su atenta lectura y verificación, para tomar cabal conocimiento de tales necesidades. Destácase que copias de tales actas han sido remitidas mediante **Oficios N° 121/00 y N° 143/00** al señor Asesor General de Incapaces en cumplimiento con lo establecido en el art. 34 inc. 9° de la Ley N° 21, y en el caso del Hospital Infante Juvenil Dra. Carolina Tobar García, a la señora Presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Lic. María Elena Naddeo, según **Oficio N° 136/00** de fecha 21 de noviembre de 2000.

B.10. Asesoramiento a la Oficina Servicios Generales Al-Anon:

Con fecha 18 de octubre de 2000 se presentaron a esta Asesoría Tutelar miembros de la Oficina Servicios Generales Al-Anon para la República Argentina (personería jurídica N° C. 6 083), que solicitaron asesoramiento en relación a sus grupos “Alateen” integrados por adolescentes familiares y amigos de alcohólicos, formados, organizados y funcionando con sujeción a los principios de la Asociación Civil. Dicho pedido fue institucionalizado mediante nota recibida con fecha 13 de noviembre de 2000.

En tal sentido, de acuerdo al mandato expresado en el art. 34 inc. 5° de la Ley N° 21, y siguiendo los criterios generales de la Asesoría General de Incapaces brindados en el Informe Anual 1999⁵ en cuanto a la vinculación con organizaciones no gubernamentales en tareas de asesoramiento extrajudicial respecto a la problemática de persona menores de edad, mediante **Oficio N° 140/00** de fecha 22 de noviembre de 2000, se le brindó el asesoramiento reclamado, remitiéndole copia de la legislación en materia de niños, niñas, adolescentes, personas con padecimientos mentales.

B.11. Consultas: Se realizaron desde el día 2 de octubre del 2000 hasta el 28 de noviembre, 13 (trece) consultas en esta Asesoría Tutelar, habiéndose prestado asesoramiento en los términos del art. 34 inc. 5° de la Ley N° 21.

⁵ Informe Anual del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 1999; punto IX “LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN EXTRAJUDICIAL”, pág. 28, ed. Imprenta de la Ciudad, enero 2000.

